

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	<u>Sumario</u>	<u>Página</u>
	<i>I Comunicaciones</i>	
	Comisión	
1999/C 351/01	Tipo de cambio del euro	1
1999/C 351/02	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida C 58/99 (ex N 289/99) — Bélgica — Mapa de ayudas regionales 2000-2006 ⁽¹⁾	2
1999/C 351/03	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 69/99 (ex NN 83/99) — Ayuda a la formación concedida a la compañía Sabena por la región flamenca ⁽¹⁾	12
1999/C 351/04	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 62/99 (ex NN 140/98) — Ampliación de capital y otras medidas de apoyo en favor de la RAI ⁽¹⁾	20
1999/C 351/05	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre las ayudas fiscales en forma de bonificación fiscal del 45 % en la provincia de Guipúzcoa (España), C 53/99 ex NN 33/99; y sobre las ayudas fiscales en forma de una bonificación fiscal del 45 % en la provincia de Vizcaya, C 54/99 ex NN 60/99 ⁽¹⁾	29
1999/C 351/06	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes artículos 92 y 93) del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ⁽¹⁾	35
1999/C 351/07	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes artículos 92 y 93) del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones	36
1999/C 351/08	No oposición a una concentración notificada (asunto COMP/M.1707 — Gilde Buy-Out Fund/Synbra) ⁽¹⁾	37
1999/C 351/09	Notificación previa de una operación de concentración (asunto COMP/M.1772 — Continental Teves/Automotive Distance Control) ⁽¹⁾	38

<u>Número de información</u>	Sumario (<i>continuación</i>)	Página
1999/C 351/10	Diplomas, certificados y otros títulos académicos de arquitectura que son objeto de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros	39
1999/C 351/11	Información arancelaria vinculante	44
	II <i>Actos jurídicos preparatorios</i>	
		
	III <i>Informaciones</i>	
	Comisión	
1999/C 351/12	Aplicación de la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000) — Intercambio, desarrollo y transferencia de información y de experiencias sobre buenas prácticas — Convocatoria de propuestas — VP/1999/021	46

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾

3 de diciembre de 1999

(1999/C 351/01)

1 euro	=	7,4387	coronas danesas
	=	328,75	dracmas griegas
	=	8,608	coronas suecas
	=	0,6255	libras esterlinas
	=	1,0015	dólares estadounidenses
	=	1,4823	dólares canadienses
	=	102,57	yenes japoneses
	=	1,5967	francos suizos
	=	8,105	coronas noruegas
	=	73,37755	coronas islandesas ⁽²⁾
	=	1,5872	dólares australianos
	=	1,9865	dólares neozelandeses
	=	6,17425	rands sudafricanos ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fuente: Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

⁽²⁾ Fuente: Comisión.

AYUDAS ESTATALES

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida C 58/99 (ex N 289/99) — Bélgica — Mapa de ayudas regionales 2000-2006

(1999/C 351/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 28 de septiembre de 1999, reproducida en las dos versiones lingüísticas auténticas en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección de Ayudas Estatales I
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 98 15

Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

1. Procedimiento

Mediante escrito P11-5320-72.466, de 21 de mayo de 1999, las autoridades belgas notificaron, con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado, la metodología que pretendían aplicar para elaborar la lista de las regiones que pueden acogerse a la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

2. Descripción de la medida

La notificación consta de tres documentos distintos referidos a las tres principales regiones de Bélgica: Región Valona (Région Wallonne), Región Flamenca (Vlaams Gewest), Región de Bruselas-Capital (Région de Bruxelles-Capitale). En cada documento se propone un límite máximo de población para la región correspondiente y un método para elaborar la lista de las regiones que pueden acogerse a la letra c). Los documentos relativos a la Región Valona y a la Región de Bruselas-Capital incluyen asimismo una lista de regiones que pueden acogerse a la letra c) y la intensidad de las ayudas a que pueden optar.

La notificación propone tres unidades geográficas distintas para fijar la lista de las zonas que pueden acogerse a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 (niveles III y V de la NUTS y partes del nivel V de la NUTS). Solamente para la Región Flamenca y la Región de Bruselas-Capital se utilizan seis indicadores cuantitativos para determinar las zonas que pueden acogerse a la letra c).

Las zonas propuestas para la Región de Bruselas-Capital presentan disparidades significativas en comparación con la media de la región, en uno o varios de los cinco indicadores cuantitativos socioeconómicos. Las zonas propuestas para su inclusión en la lista de las regiones que pueden acogerse a la letra c) en Flandes presentan un valor relativamente bajo en el indicador compuesto (que combina tres indicadores simples). La selección de zonas contempladas en la letra c) dentro de la

Región Valona se justifica fundamentalmente en términos cuantitativos.

Las autoridades belgas proponen que la lista contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 cubra un 35,2 % de la población nacional. Las regiones propuestas se presentan en la figura 1 de la carta de fecha 28 de septiembre de 1999 en la lengua auténtica reproducida a continuación del presente resumen.

3. Apreciación de la medida

La Comisión ha examinado el mapa de ayudas regionales a la luz de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE y de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional ⁽¹⁾. Cabe formular las siguientes observaciones:

3.1. Unidades geográficas utilizadas

Las autoridades belgas proponen utilizar tres tipos distintos de unidades geográficas (niveles III y V de la NUTS y partes del nivel V) tanto para la medición de disparidades en las condiciones socioeconómicas de las regiones de que se trata, como para la delimitación de las regiones subvencionables en virtud de la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87, pero no justifican la utilización del nivel V de la NUTS, ni de partes del mismo, como unidades geográficas. Sin embargo, esto es contrario al primer guión del punto 3.10.3 de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional que establecen que solamente podrán utilizarse unidades geográficas distintas de la del nivel III de la NUTS en circunstancias debidamente justificadas y que, en cualquier caso, un Estado miembro sólo puede presentar un único tipo de unidad geográfica.

⁽¹⁾ DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

3.2. Método e indicadores

En las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional se establece que las regiones propuestas para acogerse a la excepción de la letra c) deben seleccionarse sobre la base de un único método objetivo utilizando indicadores cuantitativos. El número de indicadores (simples o compuestos) debe limitarse a cinco. Se establece asimismo que las regiones propuestas en la lista deben presentar disparidades significativas (50 % de la desviación típica), en uno o varios de los indicadores utilizados, respecto a la media de las regiones del Estado miembro de que se trate que puedan optar a la excepción de la letra c).

La propuesta belga no se ajusta a varios de los requisitos mencionados por las razones que se exponen a continuación:

- las autoridades belgas proponen tres metodologías diferentes para determinar las regiones subvencionables dentro de las tres regiones administrativas,
- Solamente para la Región Flamenca y la Región de Bruselas-Capital se utilizan seis indicadores cuantitativos para determinar las zonas que pueden acogerse a la letra c),
- en el caso de la Región de Bruselas-Capital, las disparidades entre las zonas se han medido en relación con la media de las zonas de esta región que podrían optar a la excepción de la letra c), y no en comparación con la media nacional,
- en el caso de la Región Flamenca, la presentación de la metodología utilizada para la selección de las regiones de la letra c) es incompleta,
- la notificación no expone de forma detallada y transparente la metodología utilizada para la determinación de las zonas contempladas en la letra c) de la Región Valona que se ajuste a lo dispuesto en las Directrices; tampoco presenta los indicadores cuantitativos utilizados.

3.3. La lista de regiones

La notificación no ofrece una lista detallada de las zonas que puedan acogerse a la letra c) para la Región Flamenca.

3.4. Cobertura de población

El mapa de ayudas regionales cubre un 35,2 % de la población de Bélgica, por lo que no se ajusta a la Decisión de la Comisión sobre los límites máximos nacionales de cobertura de las ayudas estatales de finalidad regional en virtud de las excepciones previstas en las letras a), y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado para el período 2000-2006 ⁽²⁾, que fija en el 30,9 % el límite máximo para el mapa regional de ayudas de Bélgica.

A la vista de lo que precede, la Comisión duda que la medida propuesta sea compatible con el mercado común.

4. Conclusiones

A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, solicita a Bélgica que formule sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la apreciación del mapa de ayudas regionales propuesto para el período comprendido entre 2000 y 2006, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción del presente escrito.

„De Commissie deelt België hierbij mede dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten verstrekte informatie inzake bovengenoemde maatregel, besloten heeft de procedure van artikel 88, lid 2, EG-Verdrag in te leiden.

1. De procedure

Bij brief nr. P11-5320-72.466 van 21 mei 1999 hebben de Belgische autoriteiten overeenkomstig artikel 88, lid 3 van het Verdrag medegedeeld welke methode zij wensen toe te passen voor de afbakening van de regio's die in aanmerking komen voor de uitzondering van artikel 87, lid 3, onder c), en de vaststelling van de lijst van deze regio's (hierna „c-regio's” genoemd).

2. Beschrijving van de maatregel

2.1. Toegepaste methode

Geografische eenheden

De Belgische autoriteiten stellen voor om bij de vaststelling van de lijst van gebieden die onder artikel 87, lid 3, onder c), vallen, de volgende categorieën gebieden als geografische eenheid te nemen:

- Arrondissementen (NUTS III), gemeenten (NUTS V) en delen van gemeenten in het Waals Gewest;
- Gemeenten (NUTS V) in het Vlaams Gewest;
- Delen van gemeenten („Wijken”) en delen van „Wijken” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indicatoren

Voor het Waals Gewest worden in de aanmelding geen gekwantificeerde indicatoren voor het meten van ongelijkheden in de sociaal-economische situatie van de gemeenten voorgesteld.

⁽²⁾ DO C 16 de 21.1.1999, p. 5.

Voor het Vlaams Gewest worden de ongelijkheden in de sociaal-economische situatie van de gemeenten gemeten aan de hand van een „gecombineerde indicator” die gebaseerd is op de onderstaande enkelvoudige indicatoren:

- werkloosheidsratio (het aantal niet werkende werkzoekenden als percentage van de bevolking in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar);
- het procentuele aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid;
- het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner.

Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn de ongelijkheden in de sociaal-economische situatie van de verschillende delen van het Gewest gemeten met behulp van de volgende indicatoren:

- werkloosheidsratio;
- aandeel in de langdurige werkloosheid (> 1 jaar);
- het percentage handarbeiders onder de actieve bevolking;
- het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner;
- het aantal ongeschoolde inwoners als percentage van de totale bevolking.

De selectie van de in aanmerking komende gebieden

De vaststelling van de c-regio's in het Waals Gewest is grotendeels op grond van kwalitatieve overwegingen gerechtvaardigd (gebieden worden in aanmerking genomen omdat zij zijn opgenomen in de huidige regionale-steunkaart of wegens de „fragiele” economische situatie). In sommige gevallen wordt verwezen naar de relatief zwakke score van bepaalde regio's in termen van BBP per hoofd van de bevolking of werkloosheid.

Alle voor het Vlaams Gewest voorgedragen c-regio's scoren zwak voor de „gecombineerde indicator” (zie hierboven).

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de c-regio's als volgt vastgesteld:

- de 722 „wijken” van het Gewest zijn voor elk van de indicatoren gerangschikt;
- voor elk van de vijf indicatoren wordt de standaardafwijking berekend;
- alle „wijken” die voor tenminste één van de vijf indicatoren (zie hierboven) een significante ongelijkheid (minstens één standaardafwijking) vertonen in vergelijking met het gemiddelde van de 722 „wijken” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden geïdentificeerd;
- een selectie uit de categorie „wijken” die een significant verschil vertonen, is in de kaart opgenomen.

2.2. Lijst van regio's

De lijst van de voorgedragen c-regio's is weergegeven in de onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Lijst van gebieden die voorgedragen worden voor opneming in de Belgische regionale-steunkaart

	Voorgedragen c-regio's	NUTS niveau
Waals Gewest	Henegouwen	NUTS II
	Werkgelegenheidsbekken van de Samber	
	— Jemeppe-sur Sambre (deel)	Deel van NUTS V
	— Sambreville (deel)	Deel van NUTS V
	Werkgelegenheidsbekken van Tubeke	
	— Itter (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	— Tubeke	NUTS V
	Dinant	NUTS III
	Philippeville	NUTS III
	Bastenaken	NUTS III
	Marche	NUTS III
	Neuchateau	NUTS III

	Voorgedragen c-regio's	NUTS niveau
Waals Gewest (vervolg)	Aubange	NUTS V
	Werkgelegenheidsbekken van Virton	
	— Rouvroy	NUTS V
	— Virton (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Etalle (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Werkgelegenheidsbekken van Malmédy	
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	— Malmédy	NUTS V
	Sankt-Vith (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Maas-Vesderbekken	
	— Arrond. Luik	NUTS III
	— Amay, Engis, Héron, Villers-le-Bouillet, Wanze, Saint-Georges-sur-Meuse, Dison, Pepinster, Verviers	NUTS V
	Andenne	NUTS V
Vlaams Gewest	Koekelberg (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Sint-Jans-Molenbeek (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Anderlecht (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Vorst (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Sint-Gillis (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Brussel (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
	Scharbeek (deel)	NUTS V (gedeeltelijk)
Vlaams Gewest	Er werd geen gedetailleerde lijst van regio's verstrekt	NUTS V

2.3. Het bevolkingsbereik van het voorstel

De door de Belgische autoriteiten aangemelde regionale-steunkaart heeft betrekking op 35,2% van de nationale bevolking. De verdeling over de drie gewesten is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Het voorgestelde bevolkingsbereik van de Belgische regionale-steunkaart

Gewest	Bevolking (1.1.1998)	
	(in 1 000 inwoners)	% van het nationale totaal
Waals Gewest	2 407	23,6
Vlaams Gewest	1 044	10,4
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	137	1,3
Totaal	3 588	35,2

2.4. Steunintensiteiten

De Belgische autoriteiten stellen de volgende steunintensiteiten voor de c-regio's in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor (zie tabel 3).

Tabel 3: De voorgestelde steunintensiteiten

	Voorgestelde c-regio's	Steunintensiteit
Waals Gewest	Henegouwen	20 % NSE
	Werkgelegenheidsbekken van de Samber	20 % NSE
	Werkgelegenheidsbekken van Tubeke	20 % NSE
	Dinant	20 % NSE
	Philippeville	20 % NSE
	Bastenaen	10 % NSE
	Marche	10 % NSE
	Neuchateau	10 % NSE
	Aubange	10 % NSE
	Werkgelegenheidsbekken van Virton	10 % NSE
	Werkgelegenheidsbekken van Malmédy	20 % NSE
	Maas-Vesderbekken	20 % NSE
	Audenne	20 % NSE
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	In aanmerking komende delen van Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Brussel en Schaarbeek	20 % NSE

Voor het Vlaams Gewest werden vooralsnog geen intensiteitsmaxima voorgesteld.

3. Beoordeling van de maatregel

De Belgische autoriteiten hebben aan de procedurele vereiste van artikel 88, lid 3, EG-Verdrag voldaan door de voorgestelde regionale-steunkaart aan te melden alvorens deze van kracht te laten worden.

De Commissie heeft de voorgestelde regionale-steunkaart getoetst aan het bepaalde van artikel 87, lid 3, onder c), EG-Verdrag en de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen⁽¹⁾. Naar aanleiding hiervan maakt zij de volgende opmerkingen:

3.1. De gebruikte geografische eenheid

De Belgische autoriteiten stellen voor om drie verschillende typen geografische eenheden (met name „arrondissementen” (NUTS III), gemeenten (NUTS V) en delen van gemeenten („wijken”)) te gebruiken als geografische eenheid voor het meten van de ongelijkheden in de sociaal-economische situatie van de betrokken regio's en voor de afbakening van de regio's die in aanmerking komen voor de uitzondering van artikel 87, lid 3, onder c). Bovendien

dragen zij geen enkele rechtvaardiging aan voor het gebruik van gemeenten en „wijken” als geografische eenheid. Dit is niet in overeenstemming met punt 3.10.3, eerste streepje, van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen waarin is bepaald dat andere geografische eenheden dan eenheden van het niveau NUTS III slechts kunnen worden gebruikt indien daarvoor een dienstige rechtvaardiging wordt gegeven, en dat een lidstaat in elk geval slechts één type geografische eenheid kan voorstellen.

3.2. De methode en de indicatoren

In de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen is bepaald dat de regio's welke worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de uitzondering onder c), dient te worden vastgesteld op basis van één objectieve methode waarbij gekwantificeerde indicatoren worden gebruikt. Het aantal indicatoren (enkelvoudige indicatoren of combinaties van indicatoren) moet tot vijf worden beperkt. Tevens is bepaald dat de lijst van voorgedragen regio's voor één van de gebruikte indicatoren significante ongelijkheden (de helft van de standaardafwijking) moet vertonen met het gemiddelde van de regio's van de betrokken lidstaat die potentieel voor de afwijking van artikel 87, lid 3, onder c), in aanmerking komen.

⁽¹⁾ PB C 74 van 10.3.1998, blz. 9.

Het Belgische voorstel strookt niet met verschillende van de bovengenoemde vereisten:

- De Belgische autoriteiten stellen drie verschillende methoden voor ter vaststelling van de regio's in de drie gewesten (Waals Gewest, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
- Er worden zes gekwantificeerde indicatoren gebruikt om de c-regio's vast te stellen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen (één gecombineerde indicator voor het Vlaams Gewest en vijf enkelvoudige indicatoren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de ongelijkheden tussen de zones vergeleken met het gemiddelde van de regio's van de lidstaat die potentieel voor de uitzondering onder c) in aanmerking komen.
- Voor het Vlaams Gewest is de presentatie van de methode die is gebruikt voor de keuze van de c-regio's, onvolledig. De Commissie betwijfelt dat de voorgestelde methode garandeert dat de lijst van c-regio's voor één van de gebruikte indicatoren significante ongelijkheden vertoont (de helft van de standaardafwijking) met het gemiddelde van de potentiële c-regio's van België.
- De aanvraag bevat geen uitvoerige en transparante presentatie van de methode voor het vaststellen van de c-regio's in het Waals Gewest die in overeenstemming is met de bepalingen van de richtsnoeren. Zij bevat geen presentatie van de gebruikte gekwantificeerde indicatoren.

3.3. De lijst van de regio's

De aanvraag bevat geen uitvoerige lijst van de c-regio's voor het Vlaams Gewest.

3.4. Het bevolkingsbereik

De voorgestelde regionale-steunkaart voor België betreft 35,2 % van de Belgische bevolking. Dit is niet in overeenstemming met het besluit van de Commissie betreffende het maximale bereik per lidstaat van de regionale steunmaatregelen krachtens de uitzonderingen van artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag voor de periode 2000 tot 2006 ⁽²⁾ waarin het maximum voor de Belgische regionale-steunkaart is vastgesteld op 30,9 %.

3.5. Steunintensiteiten

Voor de c-regio's van het Waals Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden telkens de maximale steunintensiteiten voorgesteld (met name 10 % NSE in de c-regio's waarvan het BBP per inwoner, uitgedrukt in KKS, hoger is dan het communautaire gemiddelde en waarvan de werkloosheidsgraad lager is dan dat gemiddelde en 20 % NSE in de overige c-regio's).

De Commissie betwijfelt dat dit in overeenstemming is met paragraaf 4.8 van de Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. Die paragraaf stelt immers dat de bovengenoemde percentages bovengrenzen zijn en dat de Commissie erop zal toezien dat de regionale steunintensiteit van toepassing in de c-regio's daarbeneden wordt aangepast aan de ernst en intensiteit van de desbetreffende regionale problemen, bezien in een regionale context.

De aanvraag bevat geen voorstel met betrekking tot de steunintensiteiten van toepassing in de c-regio's van het Vlaams Gewest. Paragraaf 5.1 van de Richtsnoeren bepaalt dat de maximale steunintensiteiten een integraal deel uitmaken van de regionale-steunkaart van een lidstaat. De Commissie twijfelt er bijgevolg aan of de aanvraag voor zover ze betrekking heeft op het Vlaams Gewest volledig is.

In het licht van het bovenstaande betwijfelt de Commissie dat de door de Belgische autoriteiten aangemelde regionale-steunkaart verenigbaar is met het EG-Verdrag.

4. Conclusies

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie België in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, EG-Verdrag binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen kenbaar te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van zijn voorstel voor een regionale-steunkaart voor de periode van 2000 tot 2006.

De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, EG-Verdrag. Zij vestigt de aandacht op de brief aan alle lidstaten van 22 februari 1995 waarin erop wordt gewezen dat elke onwettig verleende steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht. De terugvordering geschiedt met inbegrip van de rente die verschuldigd is vanaf het ogenblik waarop de steun aan de begunstigde is uitgekeerd tot aan het tijdstip van de daadwerkelijke terugbetaling. De rente wordt berekend op grond van de referentierentevoet welke wordt gebruikt voor de berekening van het netto-subsidie-equivalent in het kader van regionale steunregelingen."

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique que, après avoir examiné les informations fournies par les autorités belges sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. Procédure

Par lettre n° P11-5320-72.466 du 21 mai 1999, les autorités belges ont notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, la méthode qu'elles souhaitent appliquer pour déterminer les régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), ainsi que la liste de ces régions [ci-après dénommées "régions c)"].

⁽²⁾ PB C 16 van 21.1.1999, blz. 5.

2. Description de la mesure

2.1. Méthode

Unités géographiques

Les autorités belges proposent d'établir la liste des zones relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), en utilisant comme unités géographiques de base les types de zones suivants:

- arrondissements (niveau III de la NUTS), communes (niveau V de la NUTS) et parties de communes dans le cas de la Région wallonne,
- communes (niveau V de la NUTS) dans le cas de la Région flamande (Vlaams Gewest),
- parties de communes (quartiers) et parties de quartiers dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale.

Indicateurs

En ce qui concerne la Région wallonne, la notification ne propose aucun indicateur quantitatif permettant de mesurer les disparités des situations socio-économiques des communes.

Pour ce qui est de la Région flamande, les disparités des situations socio-économiques des communes sont mesurées au moyen d'un "indicateur combiné" établi à partir d'indicateurs simples, à savoir:

- le taux de chômage (c'est-à-dire la part des demandeurs d'emploi dans la population âgée de 20 à 64 ans),
- la part de l'industrie dans l'emploi total,
- le revenu imposable moyen par habitant.

Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, les disparités des situations socio-économiques des différentes parties qui la composent sont mesurées à l'aide des indicateurs suivants:

- le taux de chômage,
- l'importance du chômage de longue durée (plus d'un an),
- la part du personnel ouvrier dans la population active,
- le revenu imposable moyen par habitant,
- la part des non diplômés dans la population totale.

Sélection des zones admissibles

La définition des régions c) de la Région wallonne est justifiée dans une large mesure par des considérations d'ordre qualitatif (ainsi, plusieurs zones ont été reprises parce qu'elles figurent sur l'actuelle carte des aides régionales ou que leur situation économique est "fragile"). Dans certains cas, on s'est fondé sur le score relativement faible de certaines régions en ce qui concerne le produit intérieur brut par habitant ou le chômage.

Les régions c) proposées en ce qui concerne la Région flamande réalisent toutes un "faible score" pour ce qui est de l'"indicateur combiné" (voir ci-dessus).

Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, la région c) a été déterminée de la manière suivante:

- un classement des 722 quartiers que compte cette Région a été réalisé sur la base de chaque indicateur,
- l'écart type a été calculé pour chacun des cinq indicateurs,
- tous les quartiers présentant une disparité significative (soit au moins un écart type) par rapport à la moyenne des 722 quartiers pour l'un des cinq indicateurs (voir ci-dessus), ont été recensés,
- une sélection a été opérée parmi les quartiers présentant une disparité significative; ces quartiers ont ensuite été portés sur la carte.

2.2. Liste des régions

La liste des régions c) qui sont proposées est présentée dans le tableau 1 suivant.

Tableau 1: Liste des régions qu'il est proposé de faire figurer sur la carte belge des aides à finalité régionale

	Régions c) proposées	Niveau de la NUTS
Région wallonne	Hainaut	Niveau II
	Bassin d'emploi de la Sambre — Jemeppe-sur Sambre (partie) — Sambreville (partie)	Partie du niveau V Partie du niveau V
	Bassin d'emploi de Tubize — Ittre (partie) — Tubize	Partie du niveau V Niveau V
	Dinant	Niveau III

	Régions c) proposées	Niveau de la NUTS
Région wallonne (suite)	Philippeville	Niveau III
	Bastogne	Niveau III
	Marche	Niveau III
	Neufchâteau	Niveau III
	Aubange	Niveau V
	Bassin d'emploi de Virton — Rouvroy — Virton (partie) — Étalle (partie)	Niveau V Partie du niveau V Partie du niveau V
	Bassin d'emploi de Malmédy — Malmédy — Saint-Vith (partie)	Niveau V Partie du niveau V
	Bassin Meuse-Vesdre — Arrondissement de Liège — Amay, Engis, Héron, Villers-le-Bouillet, Wanze, Saint-Georges-sur-Meuse, Dison, Pepinster, Verviers	Niveau III Niveau V
	Andenne	Niveau V
Région de Bruxelles-Capitale	Koekelberg (partie)	Partie du niveau V
	Molenbeek-Saint-Jean (partie)	Partie du niveau V
	Anderlecht (partie)	Partie du niveau V
	Forest (partie)	Partie du niveau V
	Saint-Gilles (partie)	Partie du niveau V
	Bruxelles (partie)	Partie du niveau V
	Schaerbeek (partie)	Partie du niveau V
Région flamande	Il n'a pas été fourni de liste détaillée des régions	Niveau V

2.3. Couverture démographique proposée

La carte des aides régionales notifiée par les autorités belges couvre 35,2 % de la population nationale. La répartition des zones visées entre les trois régions principales est présentée dans le tableau 2.

Tableau 2: Population couverte, d'après la proposition, par la carte belge des aides régionales

Région	Population (1.1.1998)	
	(en milliers d'habitants)	En pourcentage de la population nationale totale
Région wallonne	2 407	23,6
Région flamande	1 044	10,4
Région de Bruxelles-Capitale	137	1,3
Total	3 588	35,2

2.4. Intensités d'aide

Les autorités belges proposent les intensités d'aide suivantes pour les régions c) de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale (voir tableau 3).

Tableau 3: Intensités d'aide proposées

	Régions c) proposées	Intensité d'aide
Région wallonne	Hainaut	20 % ESN
	Bassin d'emploi de la Sambre	20 % ESN
	Bassin d'emploi de Tubize	20 % ESN
	Dinant	20 % ESN
	Philippeville	20 % ESN
	Bastogne	10 % ESN
	Marche	10 % ESN
	Neufchâteau	10 % ESN
	Aubange	10 % ESN
	Bassin d'emploi de Virton	10 % ESN
	Bassin d'emploi de Malmédy	20 % ESN
	Bassin Meuse-Vesdre	20 % ESN
	Andenne	20 % ESN
Région de Bruxelles-Capitale	Parties admissibles de Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Forest, Saint-Gilles, Bruxelles et Schaerbeek	20 % ESN

Aucun plafond d'intensité n'a encore été proposé pour la Région flamande.

3. Appréciation de la mesure

En notifiant leur proposition de carte des aides à finalité régionale préalablement à l'entrée en vigueur de celle-ci, les autorités belges ont respecté la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

La Commission a examiné cette carte à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, ainsi que des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale⁽¹⁾. Elle souhaite à ce propos faire les remarques suivantes.

3.1. Unité géographique utilisée

Les autorités belges proposent d'utiliser comme unités géographiques, à la fois pour mesurer les disparités des situations socio-économiques des régions concernées et pour délimiter les régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité trois types d'unités géographiques différents [à savoir, les arrondissements (niveau III de la NUTS), les communes (niveau V de la NUTS) et les parties de

communes (quartiers)]. De plus, elles ne fournissent aucune justification pour l'utilisation de ces communes et quartiers comme unités géographiques. Cela n'est pas conforme au point 3.10.3, premier tiret, des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, où il est précisé que des unités géographiques ne correspondant pas au niveau III de la NUTS peuvent être utilisées uniquement dans des circonstances justifiées et que chaque État membre ne peut, en tout état de cause, présenter qu'un seul type d'unité géographique.

3.2. Méthode et indicateurs

Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, les régions proposées à la dérogation selon le point c) doivent être déterminées selon une méthode unique et objective basée sur des facteurs quantitatifs. Le nombre d'indicateurs (simples ou combinés) doit être limité à cinq. De plus, la liste des régions proposées doit mettre en évidence, pour l'un ou l'autre des indicateurs utilisés, des disparités significatives (soit la moitié de l'écart type) par rapport à la moyenne des régions de l'État membre concerné qui sont susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

⁽¹⁾ JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

La proposition belge ne remplit pas plusieurs de ces exigences:

- les autorités belges proposent trois méthodes différentes en vue de déterminer les zones concernées dans les trois régions principales (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale),
- pour les seules Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale, six facteurs quantitatifs sont utilisés afin de déterminer les régions c) (soit un indicateur combiné pour la Région flamande et cinq indicateurs simples pour la Région de Bruxelles-Capitale),
- dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale, les disparités entre les zones sont mesurées par rapport à la moyenne des régions c) potentielles de la Région de Bruxelles-Capitale, plutôt que par rapport à la moyenne des régions c) potentielles de l'État membre,
- dans le cas de la Région flamande, la présentation de la méthode utilisée pour la sélection des régions c) est incomplète. La Commission doute que la méthode proposée garantisse l'inclusion, dans la liste des régions, de zones présentant, pour l'un ou l'autre des indicateurs utilisés, des disparités significatives (soit la moitié de l'écart type) par rapport à la moyenne des régions c) potentielles de la Belgique,
- la notification ne contient pas de présentation claire et détaillée de la méthode utilisée pour déterminer les régions c) de la Région wallonne conformément aux dispositions des lignes directrices. Elle ne décrit pas les indicateurs quantitatifs utilisés.

3.3. Liste des régions

La notification ne comprend aucune liste détaillée des régions c) situées en Région flamande.

3.4. Couverture démographique

La carte belge des aides régionales qui a été proposée couvre 35,2 % de la population belge, ce qui est contraire à la décision de la Commission concernant les plafonds nationaux de couverture des aides d'État à finalité régionale conformément à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période 2000-2006 ⁽²⁾, qui prévoit pour la Belgique un plafond de 30,9 %.

3.5. Intensité d'aide

Les plafonds d'intensité proposés pour les régions c) de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale sont établis au niveau maximal (à savoir 10 % en équivalent-subvention net) pour les régions c) qui ont un PIB/SPA par habitant plus élevé, et un taux de chômage plus bas que la moyenne communautaire respective, et 20 % pour les autres régions c).

La Commission a des doutes quant à la conformité avec le point 4.8 des lignes directrices des aides à finalité régionales, lesquelles disposent que les pourcentages susmentionnés constituent des limites supérieures, et que la Commission doit s'assurer que les plafonds d'intensité des aides régionales applicables dans les régions c) sont ajustés sous ces limites supérieures, pour refléter la gravité et l'intensité des problèmes régionaux dans le contexte communautaire.

La notification ne propose pas de plafonds d'intensité pour les régions c) dans la Région flamande. Le point 5.1 des lignes directrices dispose que les plafonds d'intensité d'aide sont partie intégrale des cartes d'aides régionales des États membres. En conséquence, la Commission doute que la notification concernant la Région flamande soit complète.

Eu égard à ce qui précède, la Commission doute que la carte des aides régionales notifiée par les autorités belges soit compatible avec le traité.

4. Conclusions

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, demande à la Belgique de lui présenter ses observations et de fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier sa proposition de carte des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre.

La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité et attire son attention sur la lettre adressée le 22 février 1995 à tous les États membres, dans laquelle elle précise que toute aide octroyée illégalement pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire selon les dispositions du droit national et en incluant un intérêt calculé sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales, qui court à partir de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à sa récupération effective.»

⁽²⁾ JO C 16 du 21.1.1999, p. 5.

AYUDAS ESTATALES

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 69/99 (ex NN 83/99) — Ayuda a la formación concedida a la compañía Sabena por la región flamenca

(1999/C 351/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 25 de octubre de 1999, reproducida en las dos versiones lingüísticas auténticas en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Transportes
Dirección C
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 83 53

Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

Resumen de la carta dirigida a Bélgica:

1. Mediante carta de 5 de agosto de 1997 dirigida a la Secretaría General de la Comisión, las autoridades belgas notificaron, sobre la base del apartado 3 del antiguo artículo 93 del Tratado, un proyecto de formación en beneficio de la compañía aérea Sabena.
2. El proyecto abarcaba el período del 1 de marzo de 1997 al 31 de diciembre de 1998. Se refería a 522 empleados de la compañía: 122 empleados, 360 empleados y 40 empleados en los departamentos «Technics», «Cargo» y «Comercial en mantenimiento» de la empresa, respectivamente. Tenía por objeto principal favorecer la adaptación y la polivalencia de dichos empleados.
3. La Oficina Flamenca de Colocación y Formación [Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)] organiza y se hace cargo de las actividades de formación. El coste del proyecto asciende a 64,116 millones de francos belgas, de los cuales 46 538 790 francos belgas para 1997 y 17 578 352 francos belgas para 1998. El plan de financiación prevé una aportación del Fondo Social Europeo de un 25,31 % en 1997 y un 29,65 % en 1998, en el marco del objetivo nº 4.
4. Mediante cartas de 28 de agosto y 31 de octubre de 1997, la Comisión solicitó a las autoridades belgas mayor información sobre el proyecto. Dichas autoridades remitieron la información solicitada el 29 septiembre y el 2 de diciembre de 1997. Entre otras cosas, se deduce de la misma que el proyecto ya había sido iniciado el 18 de noviembre de 1997.
5. El 16 de diciembre de 1998, la Comisión comunicó a las autoridades belgas que acababa de aprobar unas Directrices

sobre ayudas a la formación⁽¹⁾ más favorables que las anteriores por lo que se refiere a la compatibilidad del proyecto con el Tratado. En este nuevo contexto, solicitó información complementaria a las autoridades belgas, en particular, los costes detallados del proyecto así como el plan de financiación. Las autoridades belgas enviaron la información requerida mediante cartas con fecha de 18 de enero, 24 de marzo y 26 de mayo de 1999.

6. La financiación del proyecto por cuenta de la VDAB y los demás organismos públicos belgas, por un importe total de 11 777 560 francos belgas con cargo al año 1997 y de 5 213 040 francos belgas con cargo al año 1998, debe estudiarse a la luz de las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas estatales.
7. Dicha financiación constituye una ayuda estatal, puesto que:
 - la conceden organismos públicos creados para administrar las ayudas a la formación profesional procedentes de la Región Flamenca o el Estado belga,
 - afecta a los intercambios entre los Estados miembros, pues beneficia a una empresa cuya actividad de transporte aéreo, que por su naturaleza incide directamente en los intercambios, abarca la mayoría de los Estados miembros del EEE,
 - falsea la competencia, ya que se refiere a una única empresa que compite directamente dentro del mercado común con otras compañías aéreas comunitarias,

(¹) DO C 343 de 11.11.1998, p. 10.

- el proyecto no se refiere a una acción de formación con carácter de «medida general», puesto que, en operaciones de formación de este tipo, la región flamenca y la VDAB disponen de un cierto poder discrecional para elegir las empresas beneficiarias ⁽²⁾.
8. Por consiguiente, al iniciar la actividad de formación notificada antes de que hubiera una decisión de la Comisión, el Gobierno belga incumplió las obligaciones que le corresponden en virtud del apartado 3 del artículo 88 del Tratado.
9. Así pues, ha de estudiarse la cuestión de la compatibilidad de esta ayuda conforme a las Directrices antes citadas sobre ayudas a la formación, que se fundan en la exención recogida en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y en la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE para autorizar ayudas a la formación profesional dentro de unos límites y en determinadas condiciones. Pese a que las Directrices no se publicaron hasta noviembre de 1998, la Comisión tiene la intención de aplicarlas en el caso analizado.
10. El transporte aéreo entra en el ámbito de aplicación de dichas Directrices, pues se refieren explícitamente a este sector de actividad (punto 18). Además de ello, las financiaciones en cuestión pueden beneficiarse de la exención contemplada en las mismas, ya que se trata de medidas destinadas a facilitar la adaptación de los trabajadores de una empresa a cambios estructurales o tecnológicos (punto 5), y que se refieren a una formación impartida por la propia compañía Sabena o por la VDAB, que es un centro público de formación (punto 19).
11. Sin embargo, el importe de las financiaciones públicas concedidas supera con creces el límite de intensidad aceptable de la ayuda. En efecto, aunque algunas de las actividades de formación pueden considerarse generales *a priori* y beneficiarse de una intensidad del 50 %, la mayoría de los demás gastos se refiere a formaciones específicas. Para éstas últimas, la intensidad aceptable asciende al 25 % de los costes subvencionables, ya que se trata de una acción de formación específica relativa a una gran empresa fuera de una región asistida (punto 32). Los costes subvencionables se definen con precisión en el punto 30 de las Directrices.
12. En el caso presente, los costes subvencionables ascienden a 23 075 712 francos belgas para el año 1997 y a 15 300 000 francos belgas para el año 1998, lo que corresponde a la suma de los gastos de personal de los formadores (11 537 856 francos belgas en 1997 y 7 650 000 francos belgas en 1998) y de los gastos de personal de los participantes en el proyecto dentro del límite de los gastos de personal de los formadores, puesto que no hay otros costes subvencionables (gastos de desplazamiento, otros gastos corrientes, amortizaciones, servicios de asesoramiento, etc.). Por tanto, el importe máximo de las financiaciones públicas que pueden asignarse al proyecto asciende a 5 768 928 francos belgas para el año 1997 y a 3 825 000 francos belgas para el año 1998, mientras que el plan de financiación notificado prevé fi-

nanciaciones públicas de 23 555 120 francos belgas y de 10 426 000 francos belgas para los mismos años, respectivamente.

13. Se desprende de lo anterior que, en esta fase, la Comisión puede expresar serias dudas sobre la compatibilidad de la financiación de la acción de formación en cuestión con las disposiciones del artículo 87 del Tratado y del artículo 61 del Acuerdo EEE.

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, el beneficiario de cualquier ayuda ilegal podrá ser obligado a devolverla.

Texto de la carta dirigida a Bélgica

- „1. Bij deze deelt de Commissie het Koninkrijk België mede dat zij na bestudering van de door uw autoriteiten verstrekte informatie over voornoemde steun besloten heeft de procedure van artikel 88, lid 2, EG-Verdrag in te leiden.
2. In het aan het Secretariaat-generaal van de Commissie gerichte schrijven van 5 augustus 1997 (ref. P12/533/62.457) hebben de Belgische autoriteiten op grond van voormalig artikel 93, lid 3, van het Verdrag een opleidingsproject, hierna „het project” genoemd, ten behoeve van de luchtvaartmaatschappij Sabena aangemeld.
3. Sabena is de belangrijkste luchtvaartmaatschappij in België. Zij had eind 1996 10 772 personen in dienst, en haar omzet bedroeg dat jaar 55,72 miljard BEF. Haar kapitaal is voor 49,5 % in handen van Swissair en voor 50,09 % in die van de Belgische staat.
4. Het project liep van 1 maart 1997 tot 31 december 1998. Er zijn 522 werknemers van de maatschappij bij betrokken, dat wil zeggen 122, 360 en 40 werknemers in respectievelijk de afdelingen „Technics”, „Cargo” en „Commercial en onderhoud” van de onderneming:
- in de afdeling „Technics” moeten, in verband met de vervanging van de Boeing 737 en de A310 door de A330, de uniformisering van de vloot van Sabena, Swissair en Austrian Airlines, de volledige integratie van elektronica en computers en het toenemend gebruik van kunststofcomposiet-materialen, werknemers worden bijgeschoold om hun kennis uit te breiden en veelzijdiger te maken;
 - in de afdeling „Cargo” is in verband met de uitbreiding van de meer klantgerichte taken en de nieuwe organisatie van de werkzaamheden in het kader van het samenwerkingsakkoord met Swissair Cargo grotere veelzijdigheid van het personeel en herziening van de basiskwalificaties noodzakelijk;
 - in de afdeling „Commercial en onderhoud” zal een deel van het personeel complexere functies krijgen (sales agents, check-in-beampte), hetgeen ook een grotere veelzijdigheid van het betreffende personeel vereist.

⁽²⁾ Véase la sentencia del Tribunal de 26 de septiembre de 1996, en el asunto asunto C-241/94: Francia contra la Comisión («Kimberly Clark») (Requilación 1996, p. I-4551).

5. De opleidingsactiviteiten van het project worden georganiseerd en geleid door de „Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)”. De activiteiten worden integraal op de luchthaven van Brussel Nationaal uitgevoerd door de technische dienst en de dienst opleiding van Sabena. Alleen de informatica-, taal-, communicatie-, en sociale opleidingen zullen in de lokalen van de VDAB worden gegeven.
6. De kosten van het project bedragen 64,116 miljoen BEF waarvan 46,538790 miljoen in 1997 en 17,578352 miljoen in 1998. Het financieringsplan voorziet in steun van het Europees Sociaal Fonds voor 25,31 % in 1997 en 29,65 % in 1998 in het kader van doelstelling 4.
7. In de brieven van 28 augustus en 31 oktober 1997 heeft de Commissie de Belgische autoriteiten om nadere informatie over dit project gevraagd, met name over de van toepassing zijnde bepalingen van Belgisch recht, de procedures die gevolgd zijn bij de selectie van de voor beroepsopleiding steun ontvangende ondernemingen, en over de uitvoering van de maatregel. In de antwoorden van 29 september en 2 december 1997 hebben de Belgische autoriteiten de Commissie de gevraagde gegevens verstrekt. Hieruit blijkt ondermeer dat de uitvoering van het project reeds op 18 november 1997 was begonnen.

8. Op 16 december 1998 heeft de Commissie de Belgische autoriteiten medegedeeld dat zij een kaderregeling inzake opleiding ⁽¹⁾ had vastgesteld die wat betreft de verenigbaarheid van het project met het Verdrag gunstiger was dan de vorige regeling. In verband met deze nieuwe kaderregeling heeft zij de Belgische autoriteiten om aanvullende inlichtingen gevraagd, met name een kostenspecificatie en het financieringsplan van het project. De Belgische autoriteiten hebben de verlangde inlichtingen op 18 januari, 24 maart en 26 mei 1999 toegezonden. Het kostenplaatje van het project (in BEF) over de jaren 1997 en 1998 ziet er als volgt uit:

	1997	1998
— Personeelskosten van de opleiders	11 537 856	7 650 000
— Verplaatsingskosten opleiders en opgeleiden	0	0
— Andere lopende uitgaven (materiaal, benodigheden, enz.)	0	0
— Afschrijvingen van instrumenten en uitrusting op basis van het uitsluitend gebruik ervan voor het project	0	0
— Kosten van consultancy-diensten met betrekking tot het opleidingsproject	0	0
— Personeelskosten van de deelnemers aan het project waarbij rekening wordt gehouden met de uren dat de werknemers daadwerkelijk aan de opleiding deelnamen, met aftrek van de uren die zij hebben gewerkt of daaraan gelijkgestelde uren	34 650 934	9 578 352
— Alle andere projectkosten	350 000	350 000
TOTALE PROJECTKOSTEN	46 538 790	17 578 352

9. Het financieringsplan van het project voor 1997 en 1998 ziet er als volgt uit:

	1997	1998
— Financiering door de Europese Unie (ESF)	11 777 560	5 213 040
— Financiering door het Vlaamse Gewest (VDAB)	4 532 824	0
— Financiering door andere overheidsinstellingen:		
— Sectorieel Fonds Sabena voor risicogroepen	1 162 000	0
— Betaald educatief verlof	6 082 736	5 213 040
TOTALE FINANCIERING VAN OVERHEIDSWEGE	23 555 120	10 426 080
— Financiering door Sabena	22 983 670	7 152 272
— Financiering door andere particuliere organisaties	0	0
TOTALE FINANCIERING DOOR DE PRIVESector	22 983 670	7 152 272
TOTALE FINANCIERING	46 538 790	17 578 352

10. In hun laatste schrijven van 26 mei 1999 vermelden de Belgische autoriteiten dat de werkelijke uitgaven over 1997 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk was voorzien.
11. Aan de hand van bovenvermelde inlichtingen heeft de Commissie deze zaak in eerste instantie getoetst aan de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag en van de artikelen 61 en 62 van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, hierna de „EER-Overeenkomst” genoemd.
12. Op grond van artikel 87, lid 1, van het Verdrag en artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, verenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.
13. Aan deze bepalingen moet de projectfinanciering door de VDAB en de andere Belgische overheidsinstellingen ten bedrage van in totaal 11,77560 miljoen BEF in 1997 en van 5,213040 miljoen BEF in 1998 worden getoetst.
14. Onder „staatssteun” wordt in de zin van voornoemde bepalingen de steun verstaan die wordt verleend door de centrale, regionale of plaatselijke instanties van een lidstaat of door openbare of particuliere organen die de lidstaat heeft ingesteld of aangewezen om de steunregeling uit te voeren (arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 22 maart 1997, zaak 78/76, Steinike & Weinlig tegen Bondsrepubliek Duitsland ⁽²⁾). In het onderhavige geval lijkt het geen twijfel dat de VDAB en de overige Belgische overheidsinstellingen die het project medefinancieren ingesteld zijn om de door het Vlaams Gewest of de Belgische staat verleende steun aan de beroepsopleiding te beheren.

⁽¹⁾ PB C 343 van 11.11.1998, blz. 10.

⁽²⁾ Jurispr. 1977, blz. 596, punt 21 van de motivering.

15. Bovendien wordt het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloed door de projectfinancieringsmaatregelen, aangezien zij ten goede komen aan een luchtvaartmaatschappij waarvan de rechtstreeks met handel verband houdende activiteiten zich uitstrekken tot de meeste lidstaten van de EER. Deze regel geldt vooral na de inwerkingtreding op 1 januari 1993 van de Verordeningen (EEG) nr. 2407/92 van de Raad ⁽³⁾, (EEG) nr. 2408/92 van de Raad ⁽⁴⁾, en (EEG) nr. 2409/92 van de Raad ⁽⁵⁾, „Derde pakket luchtvaartmaatregelen”), waarbij de communautaire markt voor de burgerluchtvaart werd geliberaliseerd. Bovendien betekent deze overheidsfinanciering concurrentievervalsing, omdat zij slechts aan één enkele onderneming wordt verleend die op de gemeenschappelijke markt de directe concurrent is van andere communautaire luchtvaartmaatschappijen.
16. Tenslotte is het project geen onderdeel van een „algemene maatregel” op opleidingsgebied, aangezien het Vlaams Gewest en de VDAB met betrekking tot dit soort opleidingsactiviteiten beschikken over een bepaalde discretionaire bevoegdheid wat de keuze van de begunstigde onderneming betreft ⁽⁶⁾. Volgens de door de Belgische autoriteiten verstrekte informatie gold voor financiering door de overheidsorganisaties voor beroepsopleiding in dit geval als eerste voorwaarde dat Sabena door het Vlaams Gewest werd erkend als onderneming in moeilijkheden overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van het Vlaamse Ministerieel Besluit van 14 februari 1994 ⁽⁷⁾. Deze erkenning, waarvoor een voorafgaand advies van het beheerscomité van de VDAB nodig was, wordt geenszins automatisch verleend, zoals de Belgische autoriteiten in hun brief aan de Commissie van 24 maart 1999 hebben verklaard. Bovendien krijgen ondernemingen die als onderneming in moeilijkheden zijn erkend niet allemaal onder dezelfde voorwaarden overheidsfinanciering van hun opleidingsactiviteiten, aangezien, zoals de Belgische autoriteiten in hun brief van 26 mei 1999 hebben verklaard, in Vlaanderen erkenning als „onderneming in moeilijkheden” niet automatisch tot toekenning van opleidingssteun leidt.
17. Derhalve moet de financiering van het project door de VDAB en de overige Belgische overheidsinstellingen worden beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag en artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst.
18. Doordat zij al voordat de Commissie een besluit terzake genomen had met de uitvoering van het opleidingsproject begonnen was, heeft de Belgische regering niet voldaan aan de op haar krachtens artikel 88, lid 3, van het Verdrag rustende verplichtingen.
19. Derhalve dient de verenigbaarheid van de steun te worden onderzocht in het licht van de leden 2 en 3 van artikel 87 van het Verdrag en artikel 61 van de EER-Overeenkomst.
20. De bepalingen van artikel 87, lid 2 onder a), b) en c), van het Verdrag en van artikel 61, lid 2, onder a), b) en c), van de EER-Overeenkomst zijn in het onderhavige geval niet van toepassing.
21. Artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag en artikel 61, lid 3, onder a) en c), van de EER-Overeenkomst bevatten afwijkingen ten behoeve van steunmaatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van bepaalde regio's. Genoemde bepalingen lijken niet van toepassing op de betreffende steun, aangezien de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven, die door de opleidingsactiviteiten getroffen zijn, niet aan de criteria voor het in aanmerking komen voor regionale steun voldoen.
22. De bepalingen van artikel 87, lid 3, onder b) en d), en die van artikel 61 van de EER-Overeenkomst zijn hier evenmin van toepassing, omdat de betreffende maatregel niet bedoeld is om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen dan wel de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen.
23. De afwijking die in artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag en artikel 61, lid 3, onder c), van de EER-Overeenkomst is voorzien voor steunmaatregelen die de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid moeten vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad, zou hier wel van toepassing kunnen zijn. Voornoemde kaderregeling voor opleidingssteun, die binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden steun voor beroepsopleiding toestaat, is op deze afwijking gebaseerd.
24. De kaderregeling is van toepassing op de luchtvaart, want deze sector wordt met name genoemd in punt 18 daarvan. Bovendien vallen de betreffende financieringen door hun aard onder de door de kaderregeling voorziene afwijking, aangezien zij de aanpassing van werknemers van een onderneming aan structurele of technologische veranderingen (punt 5 van de kaderregeling) moeten bevorderen, en het hier gaat om een opleiding die door Sabena zelf of door de VDAB, een openbaar opleidingscentrum wordt verstrekt (punt 19 van de kaderregeling).
25. De Commissie is dan ook voornemens de kaderregeling op het onderhavige geval van toepassing te laten zijn. Deze aanpak valt gunstig uit voor het aangemelde project, omdat de vorige kaderregeling geen mogelijkheden tot vrijstelling van opleidingssteun bood uit hoofde van de bepalingen van de artikelen 87, lid 3, onder c), van het Verdrag en artikel 61, lid 3, onder c), van de Overeenkomst. Bovendien wordt in de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de voormalige artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag en van artikel 61 van de EER-Overeenkomst op staatssteun in de luchtvaartsector in hoofdstuk V.2 deze vrijstelling voorbehouden aan de staatssteun voor herstructurering ⁽⁸⁾. De mededeling heeft, op het gebied van opleidingssteun, impliciet de kaderregeling inzake opleidingssteun van november 1998 gewijzigd.
- ⁽³⁾ PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1.
- ⁽⁴⁾ PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8.
- ⁽⁵⁾ PB L 240 van 24.8.1992, blz. 15.
- ⁽⁶⁾ Zie het arrest van het Hof van 26 september 1996, zaak C-241/94, Frankrijk versus de Commissie („Kimberly Clark”), Jurispr. 1996, blz. I-4551.
- ⁽⁷⁾ Belgisch Staatsblad van 27 april 1994, blz. 11211.
- ⁽⁸⁾ PB C 350 van 10.12.1994, blz. 5.

26. De toegekende overheidsfinanciering overschrijdt evenwel ruimschoots de hoogte van de steunintensiteit die door de Commissie kan worden geaccepteerd. Ook al kunnen de informatica-, taal-, communicatie- en sociale opleidingen die in de ruimten van de VDAB gegeven worden als algemeen worden beschouwd, zodat een steunintensiteit van 50 % is toegestaan, de meeste andere uitgaven hebben betrekking op specifieke opleidingen. In die gevallen bedraagt de toegestane steunintensiteit slechts 25 %, wanneer het gaat om een specifieke opleiding bij een grote onderneming buiten een steungebied (punt 32 van de kaderregeling). De in aanmerking komende kosten, die nauwkeurig staan omschreven in punt 30 van de kaderregeling, zijn:
- 1) personeelskosten van de opleiders;
 - 2) verplaatsingskosten van de opleiders en de begunstigen van de opleiding;
 - 3) andere lopende uitgaven (materiaal, benodigdheden, enz.);
 - 4) afschrijvingen van instrumenten en uitrusting, terreinen en gebouwen naar rata van het exclusieve gebruik ervan voor het betrokken opleidingsproject;
 - 5) kosten van „consultancy-diensten” met betrekking tot de opleidingsmaatregel;
 - 6) personeelskosten van de deelnemers aan opleidingsprojecten ten bedrage van het totaal van de in de punten 1 tot en met 5 genoemde in aanmerking komende kosten. Uit hoofde van dit punt mogen slechts de uren in aanmerking worden genomen waarin de werknemers daadwerkelijk aan de opleidingen hebben deelgenomen, met aftrek van de uren waarin zij hebben gewerkt of daaraan gelijkgestelde uren.
27. In het onderhavige geval bedragen de in aanmerking komende kosten 23 075 712 BEF in 1997 en 15 300 000 BEF in 1998, zijnde de som van de personeelskosten van de opleiders (11 537 856 BEF in 1997 en 7 650 000 BEF in 1998) en de personeelskosten van de deelnemers aan het project binnen de limiet van de personeelskosten van de opleiders, aangezien de overige in aanmerking komende kosten (verplaatsingskosten, andere lopende uitgaven, afschrijvingen, consultancy-diensten) nul zijn. Daarom bedragen de maximaal toegestane overheidsfinancieringen voor het project 5 768 928 BEF in 1997 en 3 825 000 BEF in 1998, terwijl het aangemelde financieringsplan voorziet in overheidsfinancieringen van respectievelijk 23 555 120 BEF en 10 426 000 BEF in genoemde jaren.
28. De Commissie heeft ook op het ogenblik ernstige twijfels over de verenigbaarheid van de betreffende opleidingsfinanciering met de bepalingen van artikel 87 van het Verdrag en artikel 61 van de EER-Overeenkomst.
29. Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie het Koninkrijk België in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, EG-Verdrag binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen kenbaar te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van de steunmaatregelen. Zij verzoekt uw autoriteiten onverwijld een afschrift van deze brief aan de luchtvaartmaatschappij Sabena te doen toekomen.
30. De Commissie wijst het Koninkrijk België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, EG-Verdrag. Zij verwijst naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, waarin wordt gesteld dat elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.”
- « 1. Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer le Royaume de Belgique que, après avoir examiné les informations fournies par les autorités belges sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
2. Par lettre du 5 août 1997 adressée au secrétariat général de la Commission (référence P12/533/62.457), les autorités belges ont notifié, sur la base de l'ex-article 93, paragraphe 3, du traité, un projet de formation (ci-après dénommé "le projet") au bénéfice de la compagnie aérienne Sabena.
3. La compagnie Sabena est la première compagnie aérienne en Belgique. Elle employait 10 772 personnes à la fin de l'année 1996 et son chiffre d'affaires s'est élevé à 55,72 milliards de francs belges (BEF) au cours de la même année. Son capital est détenu à hauteur de 49,5 % par la compagnie Swissair et de 50,09 % par l'État belge.
4. Le projet devait s'étendre sur la période du 1^{er} mars 1997 au 31 décembre 1998. Il concerne 522 salariés de la compagnie, soit, respectivement, 122 salariés, 360 salariés et 40 salariés dans les départements "Technics", "Cargo" et "Commercial et entretien" de l'entreprise:
- dans le département "Technics", le remplacement des appareils Boeing 737 et A310 par des A330, l'uniformisation de la flotte avec celle de Swissair et d'Austrian Airlines, l'intégration complète de l'électronique et des ordinateurs ainsi que l'utilisation croissante des matériaux composites nécessitent une adaptation du personnel et une polyvalence croissante de ses connaissances,
 - dans le département "Cargo", l'élargissement des tâches plus directement orientées sur le client et une nouvelle organisation de l'activité dans le cadre de l'accord de coopération avec Swissair Cargo impliquent une polyvalence supérieure du personnel et une révision des qualifications de base,
 - dans le département "Commercial et entretien", une partie du personnel sera mutée vers des fonctions plus complexes (agents de vente, PNC, agents d'enregistrements), qui supposent également une polyvalence accrue de la part des agents concernés.

5. Les actions de formation du projet sont organisées et prises en charge par l'Office flamand du placement et de la formation, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Elles seront intégralement effectuées par les services techniques et de formation de la Sabena sur l'aéroport de Bruxelles-National, sauf les formations informatiques, linguistiques, de communication et sociales, qui se dérouleront dans les locaux du VDAB.
6. Le coût du projet s'élève à 64,116 millions de BEF, dont 46,538790 millions en 1997 et 17,578352 millions en 1998. Le plan de financement prévoit une intervention du Fonds social européen à hauteur de 25,31 % en 1997 et de 29,65 % en 1998, dans le cadre de l'objectif n° 4.
7. Par lettres des 28 août et 31 octobre 1997, la Commission a demandé aux autorités belges de lui fournir des informations supplémentaires au sujet du projet. Cette demande d'informations portait, en particulier, sur les dispositions du droit belge applicables, sur les procédures de sélection des entreprises bénéficiaires d'aides à la formation professionnelle et sur la mise en œuvre de la mesure. Par correspondances des 29 septembre et 2 décembre 1997, les autorités belges ont communiqué à la Commission les informations demandées. Il ressort, entre autres, de ces informations que la réalisation du projet avait déjà commencé à la date du 18 novembre 1997.
8. Ensuite, le 16 décembre 1998, la Commission a informé les autorités belges qu'elle venait d'adopter un encadrement des aides à la formation⁽¹⁾ plus favorable que le régime précédent en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le traité. Dans ce cadre nouveau, elle a demandé aux autorités belges de lui faire parvenir des renseignements complémentaires, notamment les coûts détaillés du projet ainsi que son plan de financement. Les autorités belges ont produit les informations requises par courriers des 18 janvier, 24 mars et 26 mai 1999. Il en ressort que les coûts détaillés du projet sont les suivants (en BEF) pour les années 1997 et 1998:

	1997	1998
— Frais de personnel des formateurs	11 537 856	7 650 000
— Frais de déplacement des formateurs et des bénéficiaires de la formation	0	0
— Autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.)	0	0
— Amortissement des instruments et équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet	0	0
— Coûts des services de conseil concernant l'action de formation	0	0
— Frais de personnel des participants au projet, en prenant seulement en compte les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent	34 650 934	9 578 352
— Autres coûts liés au projet	350 000	350 000
COÛT TOTAL DU PROJET	46 538 790	17 578 352

9. En outre, le plan de financement du projet se présente comme suit pour les années 1997 et 1998:

	1997	1998
— Financement supporté par l'Union européenne (FSE)	11 777 560	5 213 040
— Financement supporté par la Région flamande (VDAB)	4 532 824	0
— Financement supporté par d'autres organismes publics:		
— fonds sectoriel de la Sabena pour les groupes à risques	1 162 000	0
— congés payés de formation	6 082 736	5 213 040
MONTANT TOTAL DU FINANCEMENT PUBLIC	23 555 120	10 426 080
— Financement supporté par la compagnie Sabena	22 983 670	7 152 272
— Financement supporté par d'autres organismes privés	0	0
MONTANT TOTAL DU FINANCEMENT PRIVÉ	22 983 670	7 152 272
MONTANT TOTAL DU FINANCEMENT	46 538 790	17 578 352

10. Enfin, dans leur dernier courrier du 26 mai 1999, les autorités belges ont indiqué que le montant des dépenses effectives pour l'année 1997 était inférieur à celui prévu initialement.
11. Sur la base des différents éléments décrits ci-dessus, la Commission est en mesure de porter une première appréciation sur cette affaire au regard des dispositions des articles 87 et 88 du traité ainsi que des dispositions des articles 61 et 62 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE").
12. Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE sont incompatibles avec le marché commun et avec cet accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres et entre les parties contractantes, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
13. Il convient d'examiner à la lumière de ces dispositions la partie du financement du projet supportée par le VDAB et les autres organismes publics belges pour un montant total de 11,777560 millions de BEF au titre de l'année 1997 et de 5,213040 millions de BEF au titre de l'année 1998.
14. Par "aides d'État", au sens des dispositions précitées, il faut entendre les aides accordées par les autorités centrales, régionales ou locales d'un État membre ou par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne en vue de gérer l'aide (arrêt de la Cour du 22 mars 1977, affaire 78/76, Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne)⁽²⁾. Dans le cas présent, il ne fait pas de doute que le VDAB et les autres organismes publics belges parti-

⁽¹⁾ JO C 343 du 11.11.1998, p. 10.

⁽²⁾ Recueil 1977, p. 596, point 21 des motifs.

cipant au financement du projet ont été institués en vue de gérer les aides à la formation professionnelle émanant de la Région flamande ou de l'État belge.

15. Par ailleurs, les mesures de financement du projet affectent les échanges entre les États membres dès lors qu'elles bénéficient à une société dont l'activité de transport aérien, qui touche par nature directement aux échanges, s'étend à la plupart des États membres appartenant à l'EEE. Cela est particulièrement vrai depuis l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 1993, des règlements (CEE) n° 2407/92 du Conseil ⁽³⁾, (CEE) n° 2408/92 du Conseil ⁽⁴⁾, (CEE) n° 2409/92 du Conseil ⁽⁵⁾, ("Troisième paquet aérien"), libéralisant le marché communautaire de l'aviation civile. De plus, ce financement public fausse la concurrence puisqu'il n'est accordé qu'à une seule entreprise placée en concurrence directe à l'intérieur du marché commun avec d'autres compagnies aériennes communautaires.
16. Enfin, le projet ne participe pas d'une action de formation ayant le caractère d'une "mesure générale" dès lors que la Région flamande et le VDAB disposent, pour des opérations de formation de ce type, d'un certain pouvoir discrétionnaire quant au choix des entreprises bénéficiaires ⁽⁶⁾. En effet, selon les informations fournies par les autorités belges, l'intervention financière des organismes publics de formation professionnelle était d'abord, en l'espèce, soumise à la condition que la Sabena fût reconnue par la Région flamande comme une entreprise en difficulté dans le cadre des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel flamand du 14 février 1994 ⁽⁷⁾. Cette reconnaissance, qui suppose une consultation préalable du comité de gestion du VDAB, n'apparaît nullement automatique, comme l'ont indiqué les autorités belges dans leur lettre adressée à la Commission le 24 mars 1999. En outre, toutes les entreprises reconnues comme entreprises en difficulté ne bénéficient pas d'un financement public de leurs actions de formation dans des conditions identiques dans la mesure où, ainsi que l'ont précisé les autorités belges dans leur correspondance du 26 mai 1999, il n'existe pas en Flandre de lien automatique entre l'octroi d'une aide à la formation et la reconnaissance du statut d'entreprise en difficulté.
17. Dans ces conditions, le financement du projet par le VDAB et les autres organismes publics belges doit être regardé comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
18. En mettant l'action de formation notifiée à exécution avant l'intervention d'une décision de la Commission, le gouvernement belge a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
19. Il importe, en conséquence, d'examiner la question de la compatibilité de cette aide au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 87 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE.

⁽³⁾ JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

⁽⁴⁾ JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.

⁽⁵⁾ JO L 240 du 24.8.1992, p. 15.

⁽⁶⁾ Voir l'arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, affaire C-241/94, France contre Commission ("Kimberly Clark"), Recueil 1996, p. I-4551.

⁽⁷⁾ *Moniteur belge* du 27 avril 1994, p. 11211.

20. Les dispositions de l'article 87, paragraphe 2, points a), b) et c), du traité et de l'article 61, paragraphe 2, points a), b) et c), de l'accord EEE ne sont pas applicables au cas présent.
21. L'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité et l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l'accord EEE comportent des dérogations en faveur des aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions. L'aide en question ne paraît pas pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors que les arrondissements de Halle-Vilvoorde et de Louvain, concernés par l'action de formation en cause, ne remplissent pas les critères d'éligibilité aux aides régionales.
22. Les dispositions des points b) et d) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE sont également inapplicables en l'espèce, car la mesure ne vise ni à promouvoir la réalisation d'un projet européen ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ni à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine.
23. La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques lorsqu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun pourrait, par contre, trouver en l'espèce matière à application. En effet, l'encadrement précité des aides à la formation se fonde sur cette dérogation pour autoriser dans certaines limites et sous certaines conditions les aides à la formation professionnelle.
24. Le transport aérien entre dans le champ d'application de cet encadrement dès lors que celui-ci vise explicitement ce secteur d'activité (point 18 de l'encadrement). De plus, les financements en cause sont de nature à bénéficier de la dérogation prévue par l'encadrement puisqu'il s'agit de mesures destinées à faciliter l'adaptation des travailleurs d'une entreprise à des changements structurels ou technologiques (point 5 de l'encadrement) et qu'ils concernent une formation dispensée par la compagnie Sabena elle-même ou par le VDAB, centre de formation public (point 19 de l'encadrement).
25. Aussi la Commission se propose-t-elle de faire application de cet encadrement dans le cas d'espèce. Cette approche s'avère favorable au projet notifié dès lors que le cadre juridique antérieur excluait les possibilités d'exemption des aides à la formation au titre des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord. En effet, la communication de la Commission concernant l'application des ex-articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation réserve en son chapitre V 2 le bénéfice de cette exemption aux aides d'État à la restructuration ⁽⁸⁾. La communication a été, en matière d'aide à la formation, implicitement modifiée par l'encadrement des aides à la formation de novembre 1998.

⁽⁸⁾ JO C 350 du 10.12.1994, p. 5.

26. Il apparaît, toutefois, que le montant des financements publics accordés dépasse largement le plafond de l'intensité d'aide susceptible d'être acceptée par la Commission. En effet, même si les formations informatiques, linguistiques, de communication et sociales qui se dérouleront dans les locaux du VDAB peuvent *a priori* être considérées comme générales et bénéficier d'une intensité de 50 %, en revanche, la majorité des autres dépenses concernent des formations spécifiques. Pour ces dernières, l'intensité admissible est seulement de 25 %, dans la mesure où il s'agit d'une action de formation spécifique concernant une grande entreprise en dehors d'une région assistée (point 32 de l'encadrement). Les coûts éligibles sont, par ailleurs, précisément définis de la façon suivante au point 30 de l'encadrement:
- 1) frais de personnel des formateurs;
 - 2) frais de déplacement des formateurs et des bénéficiaires de la formation;
 - 3) autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.);
 - 4) amortissement des instruments et équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;
 - 5) coûts des services de conseil concernant l'action de formation;
 - 6) frais de personnel des participants aux projets de formation jusqu'à concurrence du total des coûts éligibles figurant aux points 1 à 5. À ce titre, ne peuvent être pris en compte que les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent.
27. Dans le cas présent, les coûts éligibles s'élèvent à 23 075 712 BEF pour l'année 1997, et à 15 300 000 BEF pour l'année 1998, correspondant à la somme des frais de personnel des formateurs (11 537 856 BEF en 1997 et 7 650 000 BEF en 1998) et des frais de personnel des participants au projet dans la limite des frais de personnel des formateurs puisque les autres coûts éligibles sont nuls (frais de déplacement, autres dépenses courantes, amortissements, services de conseil). Aussi le montant maximal des financements publics susceptibles d'être consacrés au projet s'élève-t-il à 5 768 928 BEF pour l'année 1997 et à 3 825 000 BEF pour l'année 1998, alors que le plan de financement notifié prévoit des financements publics respectifs de 23 555 120 BEF et de 10 426 000 BEF pour les mêmes années.
28. Il en résulte que la Commission est, à ce stade, en mesure d'exprimer des doutes sérieux sur la compatibilité du financement de l'action de formation en cause avec les dispositions de l'article 87 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE.
29. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite le Royaume de Belgique, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite les autorités belges à transmettre immédiatement une copie de cette lettre à la compagnie Sabena.
30. La Commission rappelle au Royaume de Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.»

AYUDAS ESTATALES

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 62/99 (ex NN 140/98) — Ampliación de capital y otras medidas de apoyo en favor de la RAI

(1999/C 351/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 27 de septiembre de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección de ayudas estatales II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 95 80.

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

Procedimiento

El 17 de junio de 1996, RTI, una empresa de radiodifusión controlada por Mediaset SpA (en lo sucesivo, «Mediaset»), denunció ante la Comisión una supuesta ayuda estatal concedida por Italia a RAI SpA (en lo sucesivo, «RAI»), el organismo público de radiodifusión italiano.

La Comisión solicitó información a las autoridades italianas mediante cartas de 15 de julio y 4 de septiembre de 1996, a las que las autoridades italianas contestaron por cartas fechadas el 30 de agosto y el 4 de noviembre de 1996. La Comisión envió otra carta a las autoridades italianas el 1 de julio de 1998 solicitando nuevamente información. Las autoridades italianas facilitaron algunos de los datos solicitados con motivo de una reunión celebrada el 31 de julio de 1998 y mediante carta fechada el 7 de agosto de 1998. Se celebraron varias reuniones con el denunciante.

El 19 de octubre de 1998, éste presentó una nueva denuncia ante la Comisión, completando la argumentación jurídica en contra de las mismas medidas de ayuda objeto de su primera denuncia.

El 3 de febrero de 1999, la Comisión instó a Italia a suministrar toda la información necesaria para examinar el caso. Esta decisión se comunicó a Italia por carta de 26 de febrero. Italia remitió parte de la información solicitada y sus observaciones mediante carta de 26 de marzo. La Comisión solicitó información adicional por carta de 28 de abril, a la que las autoridades italianas contestaron mediante carta de 16 de junio.

Descripción de las medidas

En su decisión conminatoria de 3 de febrero, la Comisión cuestionaba varias medidas italianas que, según el denunciante, eran contrarias al artículo 87 del Tratado:

- canon de televisión,
- exención fiscal total de la revalorización de los activos de la RAI por valor de 677 000 millones de liras italianas,
- descuento del 75 % del canon de concesión adeudado por la RAI al Estado (de 154 000 a 40 000 millones de liras italianas),
- conversión de los importes adeudados por la RAI en concepto de canon de concesión para los años 1992 y 1993 en un préstamo a largo plazo de la Cassa Depositi e Prestiti,
- ampliación de capital financiada por el IRI en 1992 por valor de 100 000 millones de liras italianas,
- concesión, en 1990, de un préstamo de 130 000 millones de liras italianas por parte de Cofiri Factor (sociedad controlada al 100 % por el IRI), como operación de *factoring* sobre los créditos de la RAI a entidades públicas,
- concesión, en 1997, de un préstamo a medio plazo por parte de Cofiri (sociedad controlada al 100 % por el IRI) para liquidar la deuda con la Cassa Depositi e Prestiti.

La presente decisión no examina la ayuda concedida a la RAI en forma de canon de televisión, puesto que, en la fase actual, la Comisión no está en condiciones de determinar si se trata de una ayuda existente, a efectos del apartado 1 del artículo 88. La evaluación de la ayuda concedida a la RAI a través del canon de televisión será objeto de otra decisión de la Comisión.

Evaluación de la ayuda

Entre las medidas cuestionadas en la decisión conminatoria dirigida a Italia, únicamente se consideran constitutivas de ayudas estatales con arreglo al apartado 1 del artículo 87 las que se enumeran a continuación, pues se componen de recursos del Estado, ofrecen una ventaja económica a su destinatario y pueden falsear el comercio entre los Estados miembros:

- la exención fiscal de la revalorización de los activos de la RAI en 1993,
- la conversión de los importes adeudados por la RAI en concepto de canon de concesión para los años 1992 y 1993 en un préstamo a largo plazo de la Cassa Depositi e Prestiti,
- la ampliación de capital financiada por el IRI en 1992.

La exención fiscal de la revalorización de los activos de la RAI constituye una ayuda estatal en la medida en que elimina una partida de gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias de la RAI, por medio de una medida estatal. Cualquier empresa normal hubiera debido pagar el impuesto sobre el importe neto de la revalorización de sus activos, al tipo impositivo normal, realizando un desembolso para abonar este impuesto al Estado. En virtud del Decreto-ley del Estado, la RAI ha podido evitar el pago de este impuesto, lo que le ha proporcionado una ventaja financiera y económica.

Respecto a la conversión de los importes adeudados por la RAI en concepto de canon de concesión para los años 1992 y 1993 en un préstamo a largo plazo de la Cassa Depositi e Prestiti, según la información recabada del Gobierno italiano, el préstamo so concedió a un interés del 9 %. Este tipo es inferior al que se aplicaba en aquel momento a operaciones similares (es decir, al tipo medio aplicado por los bancos a los préstamos a largo plazo concedidos a empresas), a saber, el 11,65 %. Por lo tanto, las condiciones del préstamo dieron a la RAI una ventaja económica, ya que pagaba menos intereses de los que hubieran correspondido a un operador privado normal en aquella época.

En cuanto a la ampliación de capital realizada por el IRI en 1992, la Comisión comprobó que la RAI no era una empresa rentable en los años anteriores al aumento de capital y que sus perspectivas en este sentido no permitían esperar que una inversión en la empresa produjera un rendimiento suficiente. Un inversor privado no hubiera invertido en una empresa de estas características, pues podía obtener mayores rendimientos en otras empresas o con otro tipo de inversiones. En consecuencia, el aumento de capital realizado por el IRI en 1992 no puede considerarse una inversión realizada en condiciones de economía de mercado, por lo que constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 87.

En este contexto, el argumento de las autoridades italianas según el cual el aumento de capital tenía por objeto compensar a la RAI por el ligero aumento del canon de televisión de 1992 resulta improcedente. Según las autoridades italianas, en 1992 el Gobierno sólo aumentó el canon de televisión en un 4,2 %, mientras que la inflación real era del 5,4 %. Supuestamente, la inyección de capital por parte del IRI pretendía compensar la pérdida de poder adquisitivo. Este argumento no puede aceptarse.

En primer lugar, de acuerdo con las normas de competencia comunitarias, la reducción de una ayuda estatal concedida por un Estado miembro a una empresa no puede «compensarse» concediendo a ésta una ayuda adicional. Por otra parte, podría demostrarse que la «compensación» no es proporcional a la «pérdida». En 1992, la RAI recaudó 2,044 billones de liras italianas en concepto de canon de televisión. Una «compensación» del 1,2 % (5,4 % menos 4,2 %) hubiera supuesto menos de 25 000 millones de liras italianas, y no los 100 000 millones que el IRI destinó al aumento de capital.

Respecto a todas las demás medidas mencionadas en la decisión conminatoria, esto es, excluyendo el canon de televisión, la Comisión estima que no constituyen ayudas estatales, pues no ofrecen ninguna ventaja económica a la RAI. Se trata de las siguientes medidas:

- descuento del 75 % del canon de concesión,
- concesión de un préstamo de *factoring* por parte de Cofiri Factor,
- concesión de un préstamo a medio plazo por parte de Cofiri.

Por el momento, la Comisión alberga dudas sobre la compatibilidad de las medidas de ayuda estatal expuestas en la presente decisión con el mercado común. Considera que dicha compatibilidad debe apreciarse a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 y en la letra c) del apartado 3 del artículo 87, teniendo en cuenta el Protocolo sobre el servicio público de radiodifusión anexo al Tratado de Amsterdam. Sin embargo, la información de que dispone en la actualidad la Comisión es insuficiente para determinar si las medidas pueden considerarse, en parte o en su totalidad, compatibles con el mercado común.

Por consiguiente, a la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, solicita a Italia que formule sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la evaluación de las medidas de ayuda, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente.

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 659/99, podrá exigirse al beneficiario la devolución de toda ayuda ilegal.

«La Commissione desidera informare l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure indicate in appresso, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

PROCEDIMENTO

1. Il 17 giugno 1996 RTI (di seguito "RTI"), un'impresa di radiodiffusione controllata da Mediaset SpA (di seguito "Mediaset"), ha presentato alla Commissione una denuncia relativa a presunti aiuti di Stato accordati dall'Italia a favore della RAI SpA (di seguito "RAI"), l'emittente pubblica italiana.
2. Con lettere del 15 luglio e del 4 settembre 1996 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane, le quali hanno risposto con lettere del 30 agosto e del 4 novembre 1996. Una nuova lettera con richiesta di informazioni è stata in seguito inviata dalla Commissione alle autorità italiane il 1° luglio 1998. Le autorità italiane hanno fornito alcuni degli elementi richiesti durante una riunione svoltasi il 31 luglio 1998 e con una lettera datata 7 agosto 1998. Hanno inoltre avuto luogo diverse riunioni con il ricorrente.
3. Il 19 ottobre 1998 il ricorrente ha presentato un ulteriore esposto alla Commissione, rafforzando le sue argomentazioni giuridiche relative alle medesime misure di aiuto cui faceva riferimento la prima denuncia.
4. Il 3 febbraio 1999 la Commissione ha ingiunto all'Italia di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare se le misure in oggetto potessero essere considerate come aiuto esistente. La decisione è stata comunicata all'Italia con lettera del 26 febbraio. Le autorità italiane hanno fornito alcune delle informazioni richieste e hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 26 marzo. La Commissione ha in seguito domandato ulteriori informazioni con lettera del 28 aprile, cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 16 giugno.

DESCRIZIONE DELLE MISURE

5. Nella decisione di ingiunzione del 3 febbraio, la Commissione ha analizzato diverse misure menzionate dal denunciante come contrarie all'articolo 87 del trattato:

- canone di abbonamento;
- esenzione da tutte le imposte relative alla rivalutazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI per un importo di 677 miliardi di ITL;
- riduzione del 75 % sul canone di concessione dovuto dalla RAI allo Stato (da 154 a 40 miliardi di ITL);
- conversione degli importi dovuti dalla RAI per il canone di concessione relativo agli anni 1992 e 1993 in un prestito a lungo termine da parte della Cassa depositi e prestiti;
- aumento del capitale da parte dell'IRI per 100 miliardi di ITL nel 1992;

— concessione, nel 1990, da parte di Cofiri Factor (una controllata al 100 % dell'IRI) di un prestito di 130 miliardi di ITL come operazione di factoring su alcuni crediti vantati dalla RAI nei confronti di enti pubblici;

— concessione, nel 1997, da parte di Cofiri (una controllata al 100 % dell'IRI) di un prestito a medio termine, utilizzato per rimborsare il debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

6. La presente decisione non riguarda l'aiuto concesso alla RAI sotto forma di canone d'abbonamento, poiché a questo stadio la Commissione non è in grado di determinare se si tratti o meno di un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. La valutazione dell'aiuto concesso alla RAI sotto forma di canone d'abbonamento sarà oggetto di una distinta decisione della Commissione.

7. La presente decisione riguarda tutti gli aiuti sopra descritti — ad eccezione del canone d'abbonamento — previsti dal decreto legge n. 558 del 30 dicembre 1993 e da altre misure ad hoc, come l'aumento di capitale da parte dell'IRI e i prestiti concessi alla RAI da Cofiri Factor e Cofiri.

8. In particolare, le misure introdotte dal decreto legge n. 558 del 30 dicembre 1993 (il cosiddetto "decreto salva-RAI"), in esame nell'ambito della presente procedura, sono le seguenti:

- l'esenzione da tutte le imposte relative alla rivalutazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI per un importo di 677 miliardi di ITL;
- la riduzione del canone di concessione versato dalla RAI allo Stato (da 154 a 40 miliardi di ITL);
- la conversione degli importi dovuti dalla RAI per il canone di concessione relativo agli anni 1992 e 1993 in un prestito a lungo termine da parte della Cassa depositi e prestiti a condizioni imprecise.

9. Ciascuna delle misure sopra descritte richiederà un esame individuale alla luce delle disposizioni del trattato e degli orientamenti e discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato.

VALUTAZIONE DELLE MISURE COME AIUTO DI STATO

10. Al fine di accertare se le relazioni finanziarie fra lo Stato e le imprese pubbliche possano considerarsi come un aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la Commissione esamina i flussi finanziari per valutare se lo Stato abbia procurato all'impresa pubblica un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti, di natura tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri.

11. Nel caso in questione occorre stabilire:

- se i fondi erogati fossero costituiti da risorse statali;
- se detti fondi abbiano favorito il beneficiario;

— se la loro concessione abbia potuto incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

ESISTENZA DI RISORSE DI NATURA STATALE

12. Il 99,55 % del capitale azionario della RAI è detenuto da IRI SpA, che è a sua volta interamente controllato dal ministero del Tesoro italiano.
13. I fondi concessi alla RAI nel 1992 sotto forma di aumento di capitale erano forniti dall'IRI. Per quanto riguarda la natura pubblica di tali fondi, è sufficiente menzionare che il Tribunale di primo grado ha statuito che "per stabilire se un aiuto possa essere qualificato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, n. 1 (ora articolo 87) del trattato, non si deve distinguere tra le ipotesi in cui l'aiuto venga concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui l'aiuto sia concesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa" ⁽¹⁾.
14. Nel caso in esame, come precedentemente spiegato, il capitale dell'IRI è interamente detenuto dal ministero del Tesoro e il suo organo di gestione è nominato dal governo italiano. Pertanto, benché i fondi concessi alla RAI non provengano direttamente dal bilancio statale, ne può essere desunta la loro natura pubblica. Il medesimo ragionamento, mutatis mutandis, può essere applicato alle misure concesse tramite Cofiri e Cofiri Factor, entrambe interamente controllate dallo stesso IRI, e al prestito concesso alla Cassa depositi e prestiti, interamente controllata dal ministero del Tesoro.
15. Per quanto riguarda la riduzione degli importi dovuti dalla RAI allo Stato per il canone di concessione, tale misura interessa direttamente il bilancio statale, poiché lo Stato decide volontariamente di rinunciare a determinate risorse finanziarie. Il medesimo ragionamento può essere applicato all'esenzione dalle imposte sulle società in relazione alla rivalutazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI, poiché lo Stato rinuncia a risorse proprie, che incidono direttamente sul suo bilancio, a favore di una specifica impresa.
16. Risulta pertanto evidente la natura pubblica delle risorse interessate dalla presente procedura.

CONCESSIONE DI UN VANTAGGIO ECONOMICO

17. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili col mercato comune gli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa, se quest'ultima ne ricava un vantaggio economico. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di aiuto non è limitata alle misure finanziarie dirette, come i conferimenti di capitale, ma dovrebbe comprendere qualsiasi altro intervento che interessi risorse statali e che, benché in forma diversa, possa produrre lo stesso effetto economico per il beneficiario. A tale riguardo, "per valutare se una misura

statale costituisca un aiuto, si deve dunque determinare se l'impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato" ⁽²⁾.

18. La valutazione, ai sensi dell'articolo 87, delle misure adottate da uno Stato a favore di un'impresa, non dovrebbe pertanto essere limitata a sovvenzioni in conto capitale o sussidi, ma dovrebbe includere tutte le misure che, pur non avendo natura di sussidio, possono produrre gli stessi effetti economici.
19. Per quanto riguarda l'esenzione dalle imposte sul reddito relative alla rivalutazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI, la misura in questione può procurare effettivamente un vantaggio economico all'emittente pubblica, poiché essa elimina un elemento di costo dal conto profitti e perdite dell'azienda. Un'altra impresa avrebbe versato allo Stato la normale aliquota d'imposta per la rivalutazione netta dei propri attivi, sostenendo di conseguenza i relativi esborsi. In virtù del decreto "salva-RAI", l'emittente pubblica ha potuto evitare il versamento di tali imposte, beneficiando direttamente di un vantaggio finanziario ed economico.
20. Tale misura, pur non costituendo uscita di cassa diretta dal bilancio dello Stato, può essere paragonata ad un'esenzione fiscale, la cui natura di aiuto è stata più volte ribadita dalla Commissione e dalla Corte di giustizia ⁽³⁾. Essa è quindi tale da apportare al beneficiario un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
21. Quanto alla riduzione del canone di concessione, risulta evidente come la misura alleggerisca un onere che la RAI avrebbe normalmente sostenuto, permettendole di utilizzare le risorse risparmiate per ridurre le proprie perdite o per finanziare investimenti, e procurandole pertanto, in virtù di detta misura, un beneficio economico e finanziario diretto. È opportuno osservare tuttavia che il canone di concessione della RAI era, al momento in cui la misura veniva adottata, significativamente più elevato di quello versato dai suoi concorrenti (la RAI pagava 140 miliardi di ITL all'anno per la concessione su tre frequenze, mentre gli altri operatori pagavano circa 0,5 miliardi per frequenza).
22. Il canone di concessione rappresenta un affitto pagato da ciascuna azienda televisiva per l'utilizzo di frequenze di trasmissione. L'ammontare pagato dagli operatori privati era stato fissato dalla legge n. 223 del 1990, mentre, al momento in cui tale legge entrava in vigore, l'ammontare a carico della RAI era stabilito dal contratto di servizio firmato dalla RAI nel 1988. Come detto più sopra, l'importo a carico degli operatori privati era nettamente inferiore a quello a carico della RAI, derivando da ciò un vantaggio economico a favore degli operatori privati rispetto alla RAI.

⁽²⁾ Causa C-387/92 del 15.3.1994, «Banco Exterior», e causa C-39/94, Racc. 1996, pag. I-3547.

⁽³⁾ Cfr. la causa C-387/92, «Banco Exterior», cit.

⁽¹⁾ Causa C-305/89, Racc. 1991, pag. I-1603.

23. La riduzione del canone di concessione della RAI non ha concesso ad essa alcun vantaggio economico in quanto essa ha, in realtà, solo ridotto lo svantaggio imposto dallo Stato all'azienda o, da un altro punto di vista, ha ridotto il vantaggio concesso agli operatori commerciali rispetto alla RAI. Questo svantaggio resta tuttora — anche dopo la riduzione — quantificabile in circa 25 volte l'ammontare pagato dai privati (circa 13 miliardi per canale per la RAI, contro gli 0,5 miliardi per i privati). Applicando strettamente le norme sugli aiuti di Stato, questa situazione potrebbe in realtà condurre ad identificare un aiuto di Stato a favore dei concorrenti della RAI, considerato che lo Stato rinuncia a parte del canone di concessione e favorisce queste aziende rispetto alla RAI che paga l'importo completo.

24. Pertanto la riduzione del canone di concessione da 154 a 40 miliardi di ITL all'anno, benché alleggerisca gli oneri della RAI, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, poiché non ha fornito al beneficiario alcun vantaggio economico sui suoi concorrenti.

25. La terza misura da esaminare alla luce delle norme sugli aiuti di Stato è costituita dalla conversione degli importi dovuti per il canone di concessione per il 1992 e il 1993 in un prestito a lungo termine da parte della Cassa depositi e prestiti. Tale misura sarebbe in grado di concedere un vantaggio economico alla RAI qualora il tasso applicato al prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti fosse inferiore rispetto ai tassi allora applicati sul mercato.

26. Pertanto, occorre valutare se al prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti fosse applicato un tasso di interesse comparabile con quelli di mercato per aziende in condizioni economiche e finanziarie simili alla RAI. In caso negativo, la concessione del prestito avrebbe procurato un beneficio economico alla RAI, tale da costituire un aiuto di Stato. In base alle informazioni fornite dal governo italiano, il prestito è stato concesso a un interesse del 9 %, che va confrontato al tasso di interesse applicato, all'epoca, a operazioni simili. La Commissione osserva a tale proposito che il tasso medio applicato dal sistema bancario per i prestiti a lungo termine alle imprese era dell'11,65 %⁽⁴⁾.

27. Dalle condizioni di tale prestito la RAI ha quindi ottenuto un chiaro vantaggio economico, nel senso che ha pagato interessi inferiori a quelli che un normale operatore privato avrebbe versato all'epoca. La misura in oggetto ha fornito un vantaggio economico alla RAI e costituisce un aiuto Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

28. Quanto all'aumento di capitale concesso dall'IRI (disposto dal decreto legge n. 2 del 1992, articolo 1), si tratta di una misura in grado di apportare un vantaggio economico al beneficiario nel caso venga concesso a condizioni diverse da quelle della logica di un investitore in un'economia di mercato. Il beneficiario può difatti servirsi di tali risorse per finanziarie le proprie spese e i propri investimenti

senza dover ricorrere a prestiti da istituzioni finanziarie, o dover remunerare adeguatamente le risorse ricevute.

29. Per valutare se l'aumento di capitale sia avvenuto a normali condizioni di mercato, è necessario analizzare i risultati economici ottenuti dalla RAI nel periodo precedente all'adozione di tale misura e le sue prospettive finanziarie stimate sulla base di previsioni di mercato, come riportati nella tabella 1.

Tabella 1: Dati consolidati RAI 1990-1995 (in miliardi di ITL)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Entrate di cui	2 995	3 390	3 629	3 613	4 334	4 435
— pubblicità	1 026	1 130	1 247	1 193	1 264	1 321
— canone di abbonamento	1 650	1 929	2 044	2 123	2 249	2 361
Costi d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	(3 285)	(3 342)
Ammortamenti	(582)	(642)	(767)	(756)	(902)	(852)
Oneri finanziari	(170)	(149)	(224)	(190)	(121)	(55)
Utile netto (perdita)	(54)	2	0	(479)	(14)	(137)

Nota: i dati del 1992 e del 1993 non sono consolidati.

30. È chiaro che la RAI non era un'azienda redditizia negli anni precedenti l'aumento di capitale. Un investitore privato non avrebbe investito in tale azienda, poiché avrebbe potuto trovare rendimenti più elevati in altre imprese o in altri investimenti. Né un tale rendimento poteva essere atteso sulla base delle prospettive economiche dell'azienda o dell'evoluzione del mercato. In tal senso, l'aumento di capitale da parte dell'IRI nel 1992 sembra concesso in circostanze diverse da quelle di un investitore privato operante in economia di mercato.

31. Le autorità italiane hanno dichiarato, nelle loro osservazioni, che l'aumento di capitale era volto a compensare, per la RAI, un aumento ridotto del canone d'abbonamento per il 1992, e che doveva pertanto essere considerato come un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. Nel 1992, secondo le autorità italiane, il governo ha aumentato il canone d'abbonamento solo del 4,2 %, a fronte di un tasso di inflazione effettivo del 5,4 %; l'aumento di capitale da parte dell'IRI avrebbe compensato la perdita di potere d'acquisto.

32. Questa argomentazione non può essere condivisa. In primo luogo, in base alle regole comunitarie di concorrenza, la riduzione di un aiuto di Stato concesso a un'impresa non può essere "compensato", da parte degli Stati membri, con l'erogazione di aiuti supplementari. È inoltre possibile dimostrare che la "compensazione" invocata dalle autorità italiane non è proporzionata alla "perdita" che la RAI avrebbe sostenuto. Nel 1992, l'importo ricevuto dall'emittente come canone d'abbonamento era stato pari a 2 044 miliardi di ITL; una compensazione dell'1,2 % (5,4 meno 4,2) su tale importo sarebbe ammontata a circa 25 miliardi di ITL, ossia molto meno dei 100 miliardi di ITL ricevuti dall'IRI come aumento di capitale.

⁽⁴⁾ Banca d'Italia, Relazione annuale 1995, appendice pag. 189.

33. Per le ragioni sopra indicate, la Commissione ritiene che tale misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
34. Non vi è inoltre alcuna norma giuridica entrata in vigore prima dell'adozione del trattato di Roma che preveda una tale compensazione. La base giuridica per la concessione dell'aiuto è quella disposta, come riconosciuto dalle stesse autorità italiane, dal decreto legge n. 2, del 2 gennaio 1992, e dal decreto del Consiglio dei ministri n. 30105/92 del 1992. È in base a tali disposizioni di legge che l'IRI, il 20 febbraio 1992, ha trasferito alla RAI l'importo ricevuto dallo Stato. Poiché nessuna delle sopracitate disposizioni è stata introdotta prima del trattato di Roma o prima della liberalizzazione del mercato, non può essere sostenuto che l'aiuto così concesso sia un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.
35. Per quanto riguarda la concessione del prestito di 130 miliardi di ITL come operazione di factoring da Cofiri Factor, tale misura avrebbe potuto costituire un aiuto di Stato se le condizioni di erogazione del prestito fossero state più favorevoli delle normali condizioni di mercato applicate all'epoca. Le informazioni fornite dalle autorità italiane dimostrano tuttavia che l'operazione è stata conclusa alle normali condizioni di mercato, come mostra la tabella 2.

Tabella 2: Condizioni del prestito alla RAI da parte di Cofiri Factor e tassi di mercato

	Tasso Cofiri Factor	Tasso di mercato ⁽¹⁾	Differenza
1990	12,90	13,35	- 0,45
1991	12,52	12,84	- 0,27
1992	15,20	14,36	+ 0,84
1993 (fino al 31 maggio)	13,95	11,40	+ 2,55

⁽¹⁾ Prime rate ABL.

Fonte: Banca d'Italia, Relazione annuale 1995, appendice pag. 188.

36. Dalla tabella n. 2 emerge chiaramente che, benché nel 1990 e nel 1991 la RAI abbia ottenuto un tasso di interesse leggermente inferiore a quello di mercato, nel 1992 e nel 1993 il tasso applicato da Cofiri Factor era notevolmente più elevato del tasso di mercato. Ciò era il risultato delle specifiche condizioni negoziate dalla RAI e da Cofiri Factor, in base alle quali il prestito era indicizzato al tasso interbancario con un differenziale in aumento per la durata del prestito stesso. Tali condizioni risultano, per tale tipo di prestito, normali condizioni di mercato.
37. Il tasso di riferimento utilizzato per la valutazione (prime rate) costituisce una ragionevole approssimazione del tasso di mercato per questo tipo di operazioni. L'operazione di factoring, infatti, non costituiva un semplice prestito diretto alla RAI che sarebbe stato soggetto al rischio di una possibile insolvenza del beneficiario del prestito. Mediante questa operazione, invece, la RAI cedeva a Cofiri

Factor alcuni crediti che essa vantava verso lo Stato ed altre istituzioni pubbliche. Questi crediti acquisiti da Cofiri Factor avevano il merito di credito dello Stato italiano, e pertanto comportavano un rischio di insolvenza limitato. In tal senso, le prime rate possono essere considerate una stima prudentiale del tasso di mercato applicabile ad operazioni simili: pertanto, le condizioni applicate da Cofiri Factor alla RAI sembrano essere normali condizioni di mercato applicabili a questo tipo di prestiti.

38. La Commissione ritiene pertanto che il prestito concesso come operazione di factoring da Cofiri Factor alla RAI non contenga alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.
39. Per ciò che riguarda il prestito concesso nel 1997 da Cofiri, le informazioni fornite dal governo italiano permettono alla Commissione di concludere che esso non contiene elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Si tratta difatti di un prestito indicizzato a un tasso di mercato con un differenziale conforme alle condizioni applicate sul mercato ad imprese in situazioni finanziarie paragonabili a quella della RAI. Occorre notare che nel 1997 la RAI si trovava in una situazione economica e finanziaria migliore di quella degli anni precedenti (ad esempio, del 1992 e 1993): aveva realizzato regolarmente dei profitti a partire dal 1995 ed aveva una solida situazione finanziaria. In tal senso, al momento della concessione del prestito, la RAI aveva un buon merito di credito.
40. Pertanto, il tasso applicato da Cofiri al prestito concesso alla RAI nel 1997 può essere considerato come un normale tasso di mercato per operazioni simili ad aziende in condizioni economiche e finanziarie comparabili. Di conseguenza, la Commissione è dell'opinione che questa operazione non contiene aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.
41. Sulla base delle precedenti valutazioni può essere concluso che, fra le misure contestate nell'ingiunzione della Commissione ⁽⁵⁾, solo le seguenti risultano aver fornito alla RAI un vantaggio economico tale da configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato:
- l'esenzione dalle imposte relative alla rivalutazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI;
 - la conversione degli importi dovuti per il canone di concessione per il 1992 e il 1993 in un prestito a lungo termine da parte della Cassa depositi e prestiti;
 - l'aumento di capitale da parte dell'IRI nel 1992.
42. Nella fase attuale, e in base alle informazioni di cui dispone, la Commissione non è in grado di quantificare il vantaggio economico ottenuto dalla RAI in virtù delle misure sopra descritte.

⁽⁵⁾ Ad eccezione, come specificato sopra, del canone d'abbonamento.

DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E DEGLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI

43. La terza condizione da soddisfare perché una misura statale rientri nel disposto dell'articolo 87 consiste nell'effetto reale o potenziale sugli scambi fra Stati membri. Nel caso in questione, come già discusso nell'ingiunzione del 3 febbraio, la distorsione della concorrenza e del commercio fra Stati membri potrebbe riguardare due diversi mercati:

- il mercato dell'acquisizione dei diritti sui programmi ("a monte");
- il mercato della radiodiffusione e della pubblicità, nonché della vendita dei programmi ("a valle").

44. È opportuno osservare che gli argomenti sollevati nell'ingiunzione della Commissione per valutare l'esistenza di scambi commerciali fra Stati membri nel settore della radiodiffusione non è stata contestata nella risposta delle autorità italiane.

45. Per quanto riguarda la distorsione sul mercato "a monte", va segnalato che l'acquisizione dei diritti sui programmi rappresenta uno degli elementi principali nell'attività di radiodiffusione. Acquistando i diritti per la trasmissione di eventi e di programmi, un'emittente si assicura un palinsesto interessante, in grado di attirare gli spettatori. Quanto più interessante è il palinsesto, tanto maggiori sono gli ascolti previsti e tanto più elevato è il prezzo che gli inserzionisti sono disposti a pagare per uno spazio pubblicitario.

46. Nel settore della radiodiffusione, inoltre, i diritti sui programmi sono spesso acquisiti su base esclusiva, cosicché l'acquirente ha il diritto di trasmetterli in esclusiva (o, a sua scelta, di concederne la sub-licenza a terzi). In quest'ottica, l'acquisizione di elementi di qualità (i diritti sui programmi) rappresenta un fattore di successo ancora più importante nel settore della radiodiffusione rispetto ad altri settori. Lo stesso ragionamento è applicabile, *mutatis mutandis*, all'acquisizione delle personalità di maggior talento, quali anchorman, conduttori, ecc., poiché consentono di attrarre, con i loro programmi, un maggior numero di spettatori, facendo così salire il prezzo dei relativi spazi pubblicitari. La possibilità per un'impresa di radiodiffusione di beneficiare di risorse statali precluse ai suoi concorrenti — qualora tali risorse non siano destinate a coprire dei costi netti derivanti dall'adempimento di una missione di interesse economico generale — potrebbe consentirle di presentare offerte più allettanti ai titolari dei diritti sui programmi e alle personalità di talento.

47. In generale, si può affermare che il mercato dell'acquisizione dei diritti sui programmi è per lo più internazionale, sebbene i diritti siano di solito acquistati per un mercato geografico specifico. A tale riguardo, è sufficiente fare riferimento alle varie decisioni della Commissione in cui si è rilevato che l'acquisizione dei diritti relativi alla trasmissione di un evento o di un programma è effettuata spesso su base transnazionale⁽⁶⁾. È opportuno inoltre notare che la RAI, in qualità di membro dell'UER (Unione europea di radiodiffusione) partecipa all'acquisizione in comune e allo

scambio di diritti sui programmi nell'ambito dell'Eurovisione.

48. Le risorse finanziarie accordate dallo Stato alla RAI in virtù delle misure in esame potrebbero pertanto aver fornito all'azienda mezzi supplementari per competere nelle procedure di gara relative all'acquisizione di diritti, provocando così una distorsione sul mercato connesso.

49. Quanto alla distorsione sul mercato "a valle", va osservato che, in generale, la principale fonte di introiti per le emittenti che trasmettono in chiaro proviene dalla vendita di spazi di trasmissione agli inserzionisti, i quali sono interessati a raggiungere il più vasto pubblico possibile per i loro messaggi pubblicitari. Quanto maggiore è il numero degli spettatori di un determinato programma — in linea di massima, a prescindere dal suo effettivo contenuto — tanto maggiore risulta, *coeteris paribus*, il prezzo degli spazi pubblicitari collegati a quel programma. È in questo senso che esiste una concorrenza indiretta nel settore della radiodiffusione, a prescindere dal mezzo impiegato (terrestre, satellite, cavo), pur in mancanza di transazioni commerciali *stricto sensu*.

50. La presenza di un'impresa finanziata dallo Stato, in grado di offrire programmi interessanti ai suoi spettatori e quindi di catturare gli ascolti, ha un impatto diretto sugli introiti della concorrenza. Sembrerebbe questa la situazione in Italia, dove la RAI detiene una percentuale significativa sia degli ascolti che della raccolta pubblicitaria disponibile (a titolo di esempio, l'audience media ottenuta dalla RAI supera normalmente il 40 %). La possibilità di beneficiare di fondi pubblici preclusi alla concorrenza potrebbe permettere a un'impresa di offrire prezzi più competitivi per i suoi spazi pubblicitari (in termini di prezzo "per contatto").

51. In Italia i concorrenti principali dell'emittente pubblica sono RTI, controllata da Mediaset, e Tele Monte Carlo, del gruppo Cecchi Gori. Una quota significativa del capitale azionario di Mediaset, in particolare, è detenuta da imprese aventi sede in Stati membri diversi dall'Italia. Inoltre Mediaset, come impresa di radiodiffusione, opera in altri Stati membri, ad esempio la Spagna (dove detiene il 40 % di Telecinco).

52. Secondo la Corte di giustizia, perché una misura statale rientri nel disposto dell'articolo 87, non occorre che essa abbia un impatto diretto sugli scambi effettivi tra Stati membri. È sufficiente che le misure collochino il beneficiario in una situazione più favorevole rispetto ad altre imprese che competono sul mercato intracomunitario⁽⁷⁾. Tale è il caso, per esempio, di misure — come quelle a favore della RAI — che riducono le spese sostenute da un'impresa nello svolgimento delle sue normali attività o per i suoi investimenti.

53. Inoltre, il fatto che la RAI sia sostenuta finanziariamente dallo Stato potrebbe impedire che investitori stranieri investano sul mercato italiano della radiodiffusione mediante l'acquisizione di una quota del capitale azionario di un'emittente privata o mediante la trasmissione del loro segnale sul territorio italiano, ad esempio per mezzo di apparecchiature satellitari.

⁽⁶⁾ Cfr., per esempio, la decisione 91/130/CEE del 19 febbraio 1991.

⁽⁷⁾ Causa 730/79, Philips Morris contro Commissione, Racc. 1980, pag. 2671.

54. Alla luce delle considerazioni suesposte, si può concludere che le misure statali adottate a favore della RAI hanno un effetto distorsivo sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
55. Dato che tali misure interessano risorse statali e hanno fornito un vantaggio economico alla RAI di natura tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri, esse configurano un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo 87, paragrafo 1.
56. Dette misure non possono essere considerate come un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, poiché non erano previste in alcuna legge adottata prima dell'entrata in vigore del trattato di Roma. Inoltre, esse non sono mai state notificate dalle autorità italiane, né sono state mai approvate dalla Commissione. L'aumento di capitale da parte dell'IRI è stato in effetti disposto dal decreto legge n. 2 del 1992 (ripreso dai decreti legge n. 192, 271 e 322 del 1992), mentre gli altri provvedimenti sono stati disposti con il decreto legge n. 558 del 30 dicembre 1993 (il cosiddetto "decreto salva-RAI"). Nessuna di queste misure è stata mai notificata alla Commissione.
57. Da quanto suesposto emerge chiaramente che la base giuridica delle misure in esame è successiva sia all'entrata in vigore del trattato che alla liberalizzazione del settore della radiodiffusione. Tali misure non possono pertanto rientrare nel campo d'applicazione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 1.

COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

58. Dopo aver valutato se le misure in questione costituiscono un aiuto di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, la Commissione deve stabilire se possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 86, paragrafo 2.
59. Le disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, possono essere escluse poiché non si tratta di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né destinati a ovviare a danni arrecati da calamità naturali.
60. Gli aiuti in questione non risultano neanche erogati per favorire lo sviluppo di specifiche regioni ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e b), data la diversità dei luoghi in cui la RAI è presente.
61. Per gli aiuti eventualmente concessi all'azienda potrebbe essere presa in considerazione una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), sempreché il sostegno per la promozione della cultura non alteri gli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune.
62. Va tuttavia osservato che le autorità italiane, al momento dell'adozione delle misure in questione, non hanno dichiarato che esse erano volte a promuovere uno o più progetti culturali della RAI. In tal senso, la Commissione non ha

individuato, negli anni presi in considerazione, alcun progetto culturale intrapreso dalla RAI il cui finanziamento potesse beneficiare, in linea di principio, delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

63. Allo stato attuale, la Commissione considera pertanto che l'esenzione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), non sia applicabile alle misure in esame.
64. In linea di principio, le misure adottate a favore della RAI potrebbero beneficiare anche della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). A tale riguardo la Commissione deve valutarne la compatibilità in base agli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione⁽⁸⁾. Le autorità italiane hanno fornito a tal fine copia del piano di ristrutturazione elaborato dalla RAI nel 1993, epoca in cui furono adottate le misure di aiuto in questione. Va osservato che nel 1993 tal piano non era stato notificato alla Commissione; essa non poteva pertanto valutare la compatibilità delle misure previste nel momento stesso dalla loro adozione.
65. Il piano di ristrutturazione 1994-1996 presentato dal governo italiano come elemento della sua risposta alla procedura di ingiunzione prevedeva il ripristino di una solida redditività della RAI per il 1995 e 1996. La Commissione nutre tuttavia alcuni dubbi riguardo ai presupposti economici alla base di tale piano, in particolare riguardo alla riduzione dei costi d'esercizio e all'aumento delle entrate provenienti dal mercato.
66. Le autorità italiane hanno inoltre fornito alcune informazioni preliminari relative a un nuovo piano di ristrutturazione in via di realizzazione da parte della RAI. Le informazioni di cui dispone la Commissione a tale riguardo, in particolare in merito ai risultati economici della RAI nei prossimi anni, non sono tuttavia sufficienti per valutare la compatibilità degli aiuti in esame con il mercato comune.
67. Nella fase attuale, la Commissione dubita della compatibilità degli aiuti di Stato descritti con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
68. Gli aiuti concessi alla RAI potrebbero inoltre beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 86, paragrafo 2, sempreché essi siano stati erogati per compensare i costi netti sostenuti dall'azienda nell'esercizio della sua missione di interesse economico generale.
69. Alla RAI sono imposti dal governo italiano alcuni obblighi di servizio pubblico, conformemente a un "Contratto di servizio" stipulato con il ministero delle Poste e delle telecomunicazioni. In linea di principio, le misure in esame potrebbero beneficiare delle disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 2, se volte a compensare i costi netti supplementari sostenuti dalla RAI nell'adempire tali obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato in virtù del sopracitato contratto.

⁽⁸⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 368 del 23.12.1994.

70. La RAI riceve anche un ulteriore finanziamento dallo Stato sotto forma di canone d'abbonamento, il quale, come affermato precedentemente, è escluso dalla presente decisione. Peraltro, la valutazione della proporzionalità del finanziamento complessivo ricevuto dall'emittente da parte dello Stato, ivi incluso il canone d'abbonamento, con i costi netti da essa sostenuti per adempiere agli obblighi di servizio pubblico non sono parte della presente decisione.
71. In questa fase, la Commissione dubita che le misure in esame possano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 86, paragrafo 2, come interpretato dal protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica allegato al trattato di Amsterdam. Tali misure sono state difatti adottate come misure *a tantum* per fornire un sostegno finanziario alla RAI in un momento specifico, mentre gli obblighi di pubblico servizio sono fissati nel "contratto di servizio" e sono gli stessi per tutta la durata del contratto stesso. Nel periodo in cui la RAI beneficiava delle misure *ad hoc* in esame, essa riceveva anche il canone d'abbonamento che le autorità italiane sostengono essere un rimborso dei costi legati agli obblighi di servizio pubblico.
72. Dalle informazioni a disposizione della Commissione, emerge che nel momento in cui venivano concessi gli aiuti non è stato introdotto nel contratto alcun nuovo obbligo di pubblico servizio. Né, d'altro canto, le autorità italiane hanno sostenuto, nelle loro osservazioni, che i fondi in esame erano destinati a compensare specifici costi addizionali legati a prestazioni di servizio pubblico.
73. Le misure in questione non sembrano essere state concesse come compensazione per costi netti supplementari sostenuti dalla RAI per l'adempimento della sua missione di servizio pubblico. Pertanto, la Commissione nutre dubbi sulla possibilità che tali misure possano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 86, paragrafo 2.
74. Per le ragioni sopra discusse, la Commissione ha deciso di iniziare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato per le seguenti misure analizzate nella presente decisione:
- l'esenzione dalle imposte relative alla rivalutazione dei valori iscritti nel bilancio della RAI;
 - la conversione degli importi dovuti per il canone di concessione per il 1992 e il 1993 in un prestito a lungo termine da parte della Cassa depositi e prestiti;
 - l'aumento di capitale da parte dell'IRI nel 1992.
75. Ha altresì deciso di non sollevare obiezioni alle altre misure *ad hoc* descritte nella presente decisione poiché non costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, vale a dire:
- riduzione del 75 % sul canone di concessione dovuto dalla RAI allo Stato (da 154 a 40 miliardi di ITL);
 - concessione, nel 1990, da parte di Cofiri Factor (una controllata al 100 % dell'IRI) di un prestito di 130 miliardi di ITL come operazione di factoring su alcuni crediti vantati dalla RAI nei confronti di enti pubblici;
 - concessione, nel 1997, da parte di Cofiri (una controllata al 100 % dell'IRI) di un prestito a medio termine, utilizzato per rimborsare il debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti.
76. Alla luce delle precedenti considerazioni la Commissione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita le autorità italiane a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione degli aiuti in esame, entro un mese dalla ricezione della presente lettera.
77. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera alla RAI.
78. La Commissione desidera ricordare alle autorità italiane che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo, e richiama l'attenzione sulla lettera inviata a tutti gli Stati membri il 22 febbraio 1995, che indica che per ogni aiuto versato illegalmente potrà essere ordinato il rimborso al beneficiario, rimborso da operarsi secondo le relative disposizioni dell'ordinamento nazionale. Gli importi rimborsati saranno inclusivi degli interessi calcolati in base ai tassi di riferimento utilizzati per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti regionali, maturati dalla data di erogazione dell'aiuto fino alla data del rimborso effettivo.»

AYUDAS ESTATALES

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre las ayudas fiscales en forma de bonificación fiscal del 45 % en la provincia de Guipúzcoa (España), C 53/99 ex NN 33/99; y sobre las ayudas fiscales en forma de una bonificación fiscal del 45 % en la provincia de Vizcaya, C 54/99 ex NN 60/99

(1999/C 351/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 17 de agosto de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a las autoridades españolas su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección de Ayudas Estatales
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 98 15

Dichas observaciones serán comunicadas a las autoridades españolas. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN DE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN

1. RESUMEN DE LA AYUDA C 53/99 (ex NN 33/99)

Estado miembro:	España
Región:	Provincia de Guipúzcoa
Ayuda:	C 53/99 (ex NN 33/99)
Denominación:	Ayudas fiscales en forma de bonificación fiscal del 45 %
Objetivo:	Desarrollo regional
Beneficiarios:	Empresas que inviertan más de 2 500 millones de pesetas españolas (15 025 303 euros)
Fundamento jurídico:	Norma Foral 7/1997 de 22 de diciembre de 1997 (disposición adicional décima)
Presupuesto:	Desconocido
Intensidad o importe:	45 % del importe de las inversiones
Forma de la ayuda:	Bonificación fiscal
Duración:	Indefinida a partir del 1 de enero de 1997

2. RESUMEN DE LA AYUDA C 54/99 (ex NN 60/99)

Estado miembro:	España
Región:	Provincia de Vizcaya
Ayuda:	C 54/99 (ex NN 60/99)

Denominación:	Ayudas fiscales en forma de bonificación fiscal del 45 %
Objetivo:	Desarrollo regional
Beneficiarios:	Empresas que inviertan más de 2 500 millones de pesetas españolas (15 025 303 euros)
Fundamento jurídico:	Norma Foral 7/1996 de 26 de diciembre de 1996 (disposición adicional cuarta) y Norma Foral 4/1998 de 2 de abril de 1998 (disposición segunda)
Presupuesto:	Desconocido
Intensidad o importe:	45 % del importe de las inversiones
Forma de la ayuda:	Bonificación fiscal
Duración:	Año 1997; indefinida a partir del 1 de enero de 1998

3. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

3.1. Carácter de ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE

La bonificación fiscal en cuestión satisface los cuatro criterios establecidos en el artículo 87 del Tratado CE. Es específica ya que favorece a determinadas empresas, esto es, sólo a las que realizan inversiones que superan el límite de 2 500 millones de pesetas españolas (15 025 303 euros). Todas las demás empresas, incluso cuando invierten pero no superan el citado límite de 2 500 millones de pesetas españolas, están excluidas del beneficio de la ayuda.

3.2. Incumplimiento de la obligación de notificación con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE

Al tratarse de medidas a las que no es aplicable la regla de *minimis*, caen bajo la obligación de notificación previa establecida en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE. Como las autoridades españolas no respetaron dicha obligación, estas ayudas pueden considerarse ilegales.

3.3. Evaluación de la compatibilidad de la bonificación fiscal del 45 %

3.3.1. Repercusiones sectoriales

En ausencia de limitaciones sectoriales, la bonificación fiscal en cuestión puede concederse a empresas sujetas a normas comunitarias sectoriales como las aplicables a las actividades de producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas del anexo I del Tratado, la pesca, la industria del carbón, la siderurgia, el transporte, la construcción naval, las fibras sintéticas y la industria automovilística. En consecuencia, cuando la empresa beneficiaria pertenece a estos sectores, la citada bonificación podría no ajustarse a dichas normas sectoriales. En estas condiciones existen dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.

3.3.2. Empresas en crisis

Considerando que la concesión de las ayudas fiscales en cuestión no tiene en cuenta la situación económica y financiera de las empresas beneficiarias, no puede descartarse que el beneficiario sea una empresa en crisis con arreglo a las Directrices sobre ayudas a las empresas en crisis (DO C 368 de 23.12.1994). Ahora bien, la concesión de las ayudas fiscales en cuestión no está sometida a las condiciones establecidas en dichas Directrices y, en especial, en su punto 3.2.3. Al no respetar dichas condiciones, existen dudas sobre la compatibilidad de estas ayudas con el mercado común cuando se destinan a empresas en crisis.

3.3.3. Normas regionales

Respecto a la aplicación de la excepción contemplada en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE a las ayudas a la inversión en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, la Comisión recuerda que, mediante su Decisión de 26 de julio de 1995 relativa a la modificación del mapa de las ayudas regionales en España, consideró que las ayudas a la inversión en favor del desarrollo regional podían considerarse compatibles con el mercado común con arreglo a la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE en todo el territorio de estas dos provincias, siempre que las grandes empresas no superaran el límite del 25 % del equivalente en subvención neta (ESN). Como el crédito fiscal tiene un tope del 45 % podría no respetar el límite máximo mencionado.

Además, cabe señalar que los costes seleccionables no se ajustan a los de la base imponible tipo de las ayudas regionales a la inversión en la medida en que las inversiones de sustitución no están excluidas y que se plantean dudas en cuanto a los gastos de inversión (tanto en lo que se refiere a las inversiones del propio programa de inversión como a los gastos de la fase de preparación) que pueden acogerse a la bonificación fiscal por falta de una definición precisa. A este respecto puede señalarse que, en la medida en que algunos de los gastos de inversión que pueden acogerse a la bonificación fiscal en cuestión no

entrarían en la base imponible tipo, las ayudas correspondientes no tendrían el carácter de ayudas a la inversión. En tales condiciones no puede excluirse que estas ayudas estén destinadas a reducir los gastos corrientes de las empresas beneficiarias. Así pues, constituirían ayudas de funcionamiento que no están sometidas ni a las condiciones establecidas en el punto 6 de la Comunicación ⁽¹⁾ de la Comisión ni a lo dispuesto en los puntos 4.15 a 4.17 de dichas Directrices regionales. Por último, las ayudas fiscales en cuestión tampoco están sujetas a otras condiciones establecidas en la Directrices regionales.

Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto se desprende que la compatibilidad de las ayudas fiscales en cuestión con el mercado común suscita dudas a tenor de lo dispuesto en las normas sobre ayudas estatales con finalidad regional.

3.3.4. Grandes proyectos

Tampoco puede descartarse que la inversión para la que se concede la ayuda esté contemplada en las Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (98/C 107/05). Ahora bien, las ayudas fiscales en cuestión no están supeditadas ni a notificación en el caso de grandes proyectos, ni a una posible reducción de su intensidad como consecuencia de la valoración de la Comisión. En estas condiciones existen dudas en cuanto a la compatibilidad de las ayudas fiscales en cuestión en el caso de los grandes proyectos.

3.3.5. Conclusión

En resumen, existen dudas sobre la compatibilidad de las ayudas fiscales en cuestión con el mercado común con arreglo a los términos de la exención regional prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. Lo mismo sucede por lo que se refiere a las otras exenciones contempladas en los apartados 2 y 3 de dicho artículo ya que estas ayudas no pueden considerarse ayudas de carácter social, previstas en la letra a) del apartado 2; no están destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional de conformidad con lo dispuesto en la letra b), y no entran en el campo de aplicación de las disposiciones de la letra c) relativas a la finalidad sectorial. Además, no tienen por objeto fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni están destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro como se contempla en la letra b) del apartado 3 del artículo 87. Por último, no están destinadas a promover la cultura o la conservación del patrimonio tal como prevé la letra d) del apartado 3 del artículo 87.

Habida cuenta de todo lo anterior, procede incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE contra las ayudas fiscales otorgadas en forma de bonificaciones fiscales del 45 % en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/99, puede exigirse al beneficiario la devolución de toda ayuda ilegal.

⁽¹⁾ Comunicación de la Comisión sobre el método para la aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 a las ayudas regionales (DO C 212 de 12.8.1988).

«Por la presente, la Comisión pone en conocimiento de las autoridades españolas que, después de haber examinado la información que obra en su poder, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE respecto a las ayudas fiscales en forma de un crédito fiscal del 45 % en la provincia de Guipúzcoa y a las ayudas fiscales en forma de un crédito fiscal del 45 % en la provincia de Vizcaya.

PROCEDIMIENTO

Gracias a las informaciones transmitidas por las autoridades españolas en el marco del procedimiento iniciado en relación con las ayudas destinadas a financiar las inversiones de la empresa Daewoo Electronics Manufacturing España SA (asunto C 76/97, ex NN 115/97), la Comisión tuvo conocimiento de la existencia, al menos desde 1995, de unas ayudas fiscales a la inversión en la provincia de Álava en forma de un crédito fiscal del 45 %. Además tuvo conocimiento, a través de informaciones extraoficiales, de que podían existir medidas similares en la provincia de Guipúzcoa y, posiblemente, también en la provincia de Vizcaya, ya que estas dos provincias disfrutaban de la misma autonomía fiscal que la provincia de Álava. Por esta razón, los servicios de la Comisión, con fecha de 15 de marzo de 1999, enviaron a la Representación Permanente de España una carta recabando información a este respecto. Mediante cartas de su Representación Permanente de 13 de abril de 1999 y 17 de mayo de 1999, las autoridades españolas solicitaron por dos veces una prórroga del plazo para responder. Por carta de 25 de mayo de 1999, los servicios de la Comisión denegaron la segunda prórroga con arreglo al Reglamento (CE) n° 659/1999. Por último, mediante carta de su Representación Permanente de 2 de junio de 1999, las autoridades españolas remitieron información relativa a las ayudas fiscales consideradas.

Según las informaciones relativas a la provincia de Guipúzcoa, las ayudas fiscales en cuestión se adoptaron con arreglo a la disposición adicional décima de la Norma Foral n° 7/1997 ⁽²⁾, de 22 de diciembre de 1997. En virtud de dicha disposición, las ayudas van destinadas a determinadas inversiones realizadas a partir del 1 de enero de 1997. En cuanto a la información relativa a la provincia de Vizcaya, las ayudas fiscales consideradas se adoptaron con arreglo a la disposición adicional cuarta de la Norma Foral n° 7/1996 ⁽³⁾, de 26 de diciembre de 1996. En virtud de dicha disposición, las ayudas se destinan a determinadas inversiones realizadas a lo largo de 1997. Acto seguido, la disposición fue prorrogada de forma indefinida mediante la disposición segunda de la Norma Foral n° 4/1998 ⁽⁴⁾, de 2 de abril de 1998.

1. Ayudas fiscales aplicables a partir del 1 de enero de 1997

El texto de las mencionadas disposiciones de Guipúzcoa y Vizcaya es idéntico, salvo por lo que se refiere a la prórroga relativa a Vizcaya, donde el límite de cinco años del párrafo

⁽²⁾ Norma Foral 7/1997 de 22 de diciembre de 1997 (disposición adicional décima).

⁽³⁾ Norma Foral 7/1996 de 26 de diciembre de 1996 (disposición adicional cuarta).

⁽⁴⁾ Norma Foral 4/1998 de 2 de abril de 1998 (disposición segunda).

segundo se suprimió a partir del 1.1.1998. En sustancia, el texto es el siguiente:

“Las inversiones en activos fijos materiales nuevos, efectuadas desde el 1 de enero de 1997, que excedan de 2 500 millones de pesetas según Acuerdo de la Diputación Foral⁽⁵⁾, gozarán de un crédito de impuesto del 45 por 100 del importe de la inversión que determine la Diputación Foral de Gipuzkoa aplicable a la cuota a pagar del impuesto personal.

La deducción no aplicada por insuficiencia de cuota podrá aplicarse en los períodos impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos a aquél para el que se haya dictado el Acuerdo de concesión de la misma.

El cómputo del plazo para la aplicación de esta deducción podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados positivos.

El acuerdo a que se refiere el primer párrafo de este artículo fijará los plazos y limitaciones que en cada caso resulten de aplicación.

Los beneficios reconocidos al amparo del presente artículo serán incompatibles con cualesquiera otros beneficios tributarios existentes en razón de las mismas inversiones.

Igualmente la Diputación Foral determinará la duración del proceso de inversión que podrá incluir inversiones realizadas en la fase de preparación del proyecto origen de la inversión objeto del beneficio fiscal.”

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS AYUDAS FISCALES EN CUESTIÓN

La Comisión constata que el objeto de las ayudas es la inversión en nuevos activos fijos materiales siempre y cuando superen los 2 500 millones de pesetas españolas y se hayan efectuado a partir del 1 de enero de 1997.

Aunque el crédito fiscal en cuestión sea incompatible con cualquier otra ventaja fiscal existente que tenga su origen en las mismas inversiones, la Comisión observa que es acumulable con otras ayudas, como las que adoptan la forma de subvenciones.

EVALUACIÓN DE LAS AYUDAS FISCALES EN CUESTIÓN

2. Carácter de ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE

La Comisión recuerda que, para la aplicación de las normas comunitarias en materia de ayudas estatales, el carácter fiscal de las medidas de que se trate es irrelevante puesto que el artículo 87 se aplica a las medidas de ayuda “bajo cualquier forma”. No obstante, la Comisión pone de relieve que, para calificarlas de ayuda, las medidas en cuestión deben cumplir acumulativamente los cuatro criterios definidos en el artículo 87, que se analizan a continuación.

En primer lugar, la Comisión observa que el crédito fiscal anteriormente citado proporciona a sus beneficiarios una ventaja que asciende al 45 % del importe de las inversiones que reduce las cargas que normalmente gravan su presupuesto, por medio de una reducción parcial del importe del impuesto devengado.

En segundo lugar, la Comisión considera que el susodicho crédito fiscal implica una pérdida de ingresos fiscales y en consecuencia puede equipararse al consumo de recursos del poder público en forma de gastos fiscales.

La Comisión considera, en tercer lugar, que dicho crédito fiscal afecta a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros. En efecto, habida cuenta que los beneficiarios ejercen actividades económicas que pueden ser objeto de intercambios entre los Estados miembros, la ayuda refuerza la posición de las empresas beneficiarias frente a la de otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, que de esta manera resultan afectados. Además las empresas beneficiarias mejoran su rentabilidad gracias al aumento de su resultado neto (beneficios después de impuestos). Las empresas beneficiarias están así en condiciones de competir con las empresas que no se benefician del crédito fiscal, bien porque no invirtieron, bien porque sus inversiones no alcanzaron el límite mínimo de 2 500 millones de pesetas españolas.

Por último, la Comisión opina que el citado crédito fiscal es específico o selectivo en el sentido de que favorece a determinadas empresas. En efecto, sólo las empresas que realizan inversiones superiores a los 2 500 millones de pesetas españolas (15 025 303 euros) pueden beneficiarse del crédito fiscal en cuestión. Todas las demás empresas, incluso las que invierten, pero sin superar el límite citado de 2 500 millones, no pueden beneficiarse de las ayudas.

La Comisión considera que este carácter de ventaja selectiva nace asimismo de un poder discrecional de la administración fiscal. En este caso concreto, la Comisión constata que las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y de Vizcaya disponen de un poder discrecional para determinar qué inversiones, de un importe superior a 2 500 millones de pesetas españolas pueden beneficiarse del crédito fiscal, para decidir a qué parte de las inversiones puede aplicarse la reducción del 45 % y para fijar los plazos y los límites máximos aplicables a cada caso.

En conclusión, la Comisión considera que el citado crédito fiscal es una ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE y en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE ya que se trata de una ayuda otorgada por el Estado por medio de fondos estatales, que favorece a algunas empresas, falsea la competencia y afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

3. Incumplimiento de la obligación de notificación impuesta por el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE

Dado que las autoridades españolas no se han comprometido a conceder las ayudas respetando las condiciones⁽⁶⁾ relativas a las ayudas *de minimis*, la Comisión estima que no se puede considerar que estas ayudas estén cubiertas por la norma *de minimis*.

⁽⁵⁾ Gobierno provincial.

⁽⁶⁾ Véase la Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas *de minimis* publicada (DO C 68 de 6.3.1996).

Tratándose de ayudas estatales que no están cubiertas por la citada norma *de minimis*, la Comisión alega que es obligatoria su notificación previa, tal y como se establece en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y en el apartado 3 del artículo 62 del Acuerdo EEE. A pesar de ello, las autoridades españolas no han respetado esta obligación. Por ello, la Comisión considera que estas ayudas pueden considerarse ilegales. La Comisión lamenta a este respecto que las autoridades españolas hayan incumplido su obligación de notificación previa de las ayudas en cuestión.

4. Evaluación de la compatibilidad del crédito fiscal del 45 %

La Comisión constata que el citado crédito fiscal es una ayuda supeditada a la realización de una inversión⁽⁷⁾. Además la Comisión recuerda que, en el anexo I de las Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional (98/C 74/06), precisó que las ayudas fiscales pueden considerarse como ayudas a la inversión cuando ésta constituye su base. Además cualquier ayuda fiscal puede entrar en esta categoría si su importe alcanza un límite expresado en porcentaje de la inversión. En el caso que nos ocupa, el crédito fiscal cumple estas condiciones ya que, por una parte, tiene como base imponible, bien los nuevos activos fijos, bien la inversión, y, por otra, su cuantía asciende al 45 % de la inversión. Por ello, la Comisión considera que dicho crédito fiscal reviste el carácter de una ayuda a la inversión. Conviene pues, examinar las distintas normas comunitarias en materia de ayudas a la inversión. A falta, no obstante, de una definición precisa de los términos “inversión” e “inversiones en la fase de preparación” incluidos en la disposición que establece las ayudas fiscales en cuestión aplicables a partir del 1 de enero de 1997, la Comisión no puede excluir, en esta fase, que una parte de los gastos de inversión que reúnen los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal en cuestión entren en la definición comunitaria de inversión inicial⁽⁸⁾. En esos casos, las ayudas no podrían considerarse como ayudas a la inversión sino como ayudas con otras finalidades: asesoría, funcionamiento, etc.

Repercusiones sectoriales

El crédito fiscal en cuestión, que no está sujeto a limitaciones sectoriales, pueden concederse a empresas sometidas a normas comunitarias sectoriales, como las aplicables a las actividades de producción, transformación y comercialización de los productos agrarios del anexo I del Tratado, a la pesca, a la industria del carbón, ala siderurgia, al transporte, a la construcción naval, a las fibras sintéticas y a la industria automovilística. En consecuencia, la Comisión considera que las ayudas fiscales en forma de un crédito del 45 % pueden incumplir dichas normas sectoriales. En estas condiciones, la Comisión expresa sus dudas respecto a la compatibilidad de dichas ayudas cuando el beneficiario opera en un sector sujeto a las normas especiales comunitarias.

Empresas en crisis

Dado que la concesión de las ayudas fiscales en cuestión no tiene en cuenta la situación económica y financiera de las

empresas beneficiarias, la Comisión considera que no se puede excluir que el beneficiario sea una empresa en crisis con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 368 de 23.12.1994). Ahora bien, la concesión de dichas ayudas fiscales no se somete a las condiciones establecidas, en particular, en el punto 3.2.3 de las citadas Directrices. Al no respetar dichas condiciones, estas ayudas plantean dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común cuando se destinan a empresas en crisis.

Normas regionales

En lo que se refiere a la aplicación de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE a las ayudas a la inversión en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, la Comisión recuerda que, por medio de su Decisión de 26 de julio de 1995, relativa a la modificación del mapa español de ayudas regionales, consideró que ambas provincias eran regiones en las que las ayudas a la inversión en favor del desarrollo regional podían considerarse compatibles con el mercado común con arreglo a la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, siempre que no superasen el límite máximo del 25 % del equivalente en subvención neta (ESN) en el caso de las grandes empresas.

Además, la Comisión también recuerda que, en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME)⁽⁹⁾, la intensidad de la ayuda a la inversión puede, según las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas⁽¹⁰⁾, sobrepasar en un 10 % el límite máximo regional de aplicación para las grandes empresas, a condición de que el total no supere un 30 % de ESN.

Asimismo, la Comisión pone de relieve que estos límites máximos se aplican solamente a determinados costes seleccionables contenidos en la base imponible tipo indicada en la letra c) del punto 5 del anexo de la Resolución del Consejo⁽¹¹⁾ de 20 de octubre de 1971, en el punto 18 del anexo de la Comunicación⁽¹²⁾ de 1979 o en el punto 4.4 de las Directrices sobre las ayudas estatales con finalidad regional (98/C 74/06), siempre que satisfagan la definición comunitaria de inversión inicial anteriormente citada, que excluye, en especial, las inversiones de sustitución. Por último, la Comisión destaca que, en cuanto a las ayudas posteriores a la entrada en vigor de las citadas Directrices regionales, éstas son de aplicación. Por lo tanto, las ayudas a la inversión que no superan estos límites máximos también están sujetas a ciertas condiciones establecidas en dichas Directrices regionales como una contribución mínima del beneficiario del 25 % de la inversión (punto 4.2), la presentación de la solicitud de la ayuda antes del inicio de la ejecución de los proyectos de inversión (punto 4.2), el mantenimiento de la inversión durante un período mínimo de cinco años (punto 4.10), la subordinación de las ayudas en favor de las inversiones inmateriales a las condiciones del punto 4.6, el respeto de los límites máximos de ayuda respectivos en caso de acumulación (puntos 4.18 a 4.21).

(7) Véase el anexo de la Comunicación de la Comisión de 1979 (DO C 31 de 3.2.1979).

(8) Véase el punto 18 del anexo de la Comunicación de la Comisión de 1979 (DO C 31 de 3.2.1979) o el punto 4.4 de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional (98/C 74/06).

(9) Según lo dispuesto en la Recomendación de la Comisión de 3 de abril de 1996 relativa a la definición de las pequeñas y medianas empresas (96/C 213/04).

(10) Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas (DO C 213 de 23.7.1996).

(11) DO C 111 de 4.11.1971.

(12) DO C 31 de 3.2.1979.

Ahora bien, la Comisión observa en primer lugar que las ayudas fiscales otorgadas en forma de un crédito fiscal del 45 % no tienen un límite máximo del 25 % del ESN en el caso de las grandes empresas ni del 30 % del ESN en el caso de las PYME. Además, la Comisión constata que los costes seleccionables no se ajustan a los de la base imponible tipo anteriormente mencionada en la medida en que, por una parte, no se excluyen las inversiones de sustitución y, por otra, existe una incertidumbre respecto a los gastos de inversión (tanto los del propio programa de inversión como los de la fase de preparación), que pueden optar al crédito fiscal. En efecto, falta una definición precisa. A este respecto, la Comisión pone de relieve que, en la medida en que determinados gastos de inversión seleccionables no entran en la base imponible tipo, las ayudas correspondientes no tendrían el carácter de ayudas a la inversión en el sentido de las Directrices antes citadas. En estas condiciones, la Comisión considera que no puede excluirse que estas ayudas estén destinadas a financiar otras actividades como el asesoramiento o a reducir los gastos corrientes de las empresas beneficiarias, revistiendo así el carácter de ayudas de funcionamiento. Ahora bien, estas ayudas de funcionamiento no están sujetas ni a las condiciones establecidas en el punto 6 de la Comunicación de la Comisión ⁽¹³⁾, ni en los puntos 4.15 a 4.17 de las Directrices regionales. Por último, la Comisión observa que las ayudas fiscales en cuestión tampoco tienen que cumplir las otras condiciones enumeradas en el punto precedente que fueron establecidas por las Directrices regionales. En cuanto a otras posibles ayudas, como las destinadas a recibir asesoramiento, la Comisión no puede pronunciarse por carecer de informaciones más precisas.

Por lo tanto, la Comisión opina que la compatibilidad de las ayudas fiscales en cuestión suscita dudas, a tenor de las normas sobre ayudas estatales con finalidad regional.

Ayudas regionales en favor de grandes proyectos

Por lo que se refiere al período posterior al 1 de septiembre de 1998, la Comisión considera además que no puede excluirse que la inversión a la que se destinó la ayuda esté cubierta por las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (98/C 107/05). En efecto, todos los proyectos de inversión cuyo importe es superior a 50 millones de euros (15 millones de euros en el caso de los sectores de la industria textil o de confección), cuya intensidad sobrepasa un 50 % el límite máximo regional, y la ayuda por puesto de trabajo sobrepasa 40 000 euros/puesto de trabajo (30 000 euros/puesto de trabajo en el caso de los sectores de la industria textil o de confección) o los proyectos de inversión en los que la ayuda total supera 50 millones de euros, deben ser objeto de una notificación individual en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, para que la Comisión pueda determinar cuál es la intensidad máxima de la ayuda compatible con el mercado común. Ahora bien, las ayudas fiscales en cuestión no se supeditan ni a la notificación en el caso de los grandes proyectos, ni a una posible reducción de la intensidad de la ayuda como consecuencia de una valoración de la Comisión. En estas condiciones, la Comisión pone de relieve sus dudas en cuanto a la compatibilidad de las ayudas fiscales en cuestión en el caso de los grandes proyectos.

Resumen

En resumen, la Comisión expresa sus dudas en cuanto a la compatibilidad de las ayudas fiscales en cuestión con el mercado común según lo dispuesto en la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE relativa "a las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo (...) de determinadas regiones económicas ...". Otro tanto sucede por lo que se refiere a las demás exenciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE. En efecto, estas ayudas no pueden considerarse ayudas de carácter social, contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 87, no están destinadas a remediar los daños causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional tal como prevé la letra b) del apartado 2 del artículo 87, y no entran en el campo de aplicación de las disposiciones de la letra c) del apartado 2 del artículo 87 sobre "las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades ...". Además, no tienen por objeto fomentar la realización de un proyecto importante de interés europeo común o poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro tal como se contempla en la letra b) del apartado 3 del artículo 87. Por último, no están destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio según lo dispuesto en la letra d) del apartado 3 del artículo 87.

Conclusión

Habida cuenta de las consideraciones que preceden, la Comisión invita a las autoridades españolas, con arreglo al procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, a que, en el plazo de dos meses desde la fecha de recepción de la presente carta, le presenten sus observaciones y le proporcionen cualquier información útil para la evaluación de las ayudas fiscales en forma de un crédito fiscal del 45 % en la provincia de Guipúzcoa, instauradas mediante la disposición adicional décima de la Norma Foral nº 7/1997, de 22 de diciembre de 1997, y en forma de un crédito fiscal del 45 % en la provincia de Vizcaya, instauradas mediante la disposición adicional cuarta de la Norma Foral nº 7/1996, de 26 de diciembre de 1996, prorrogadas por la disposición segunda de la Norma Foral nº 4 de 1998, de 2 de abril de 1998. Concretamente, dicha información útil solicitada incluirá las copias de todos los acuerdos de concesión de los créditos fiscales en cuestión, en los que conste al menos la naturaleza de los costes de inversión que podían beneficiarse de las ayudas, el importe del crédito fiscal de cada beneficiario, las ayudas pagadas a cada beneficiario y el saldo de las que quedan por pagar, el posible carácter de empresa en crisis de los beneficiarios que motivaría la aplicación de las citadas Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de las empresas en crisis, los detalles en caso de duplicación (importe, costes seleccionables, regímenes de ayudas aplicados en su caso, etc.), y la definición precisa y detallada de los conceptos "inversión" e "inversiones en la fase de preparación". Por último, la Comisión invita a las autoridades españolas a transmitir inmediatamente una copia de esta carta a los posibles beneficiarios de la ayuda.

Conviene precisar que la presente decisión sólo se refiere a las medidas fiscales que en ella se examinan explícitamente. No se pronuncia sobre las demás medidas incluidas en el régimen fiscal específico de la provincia de Guipúzcoa o de la provincia de Vizcaya. La Comisión se reserva la posibilidad de examinar, bien como régimen general, bien a través de su aplicación a una empresa concreta, aquellas medidas que puedan constituir ayudas.»

⁽¹³⁾ Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE a las ayudas regionales (DO C 212 de 12.8.1988).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes artículos 92 y 93) del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(1999/C 351/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 26.8.1999

Estado miembro: España

Ayuda: N 368/99

Denominación: Aumento de 20 000 millones de pesetas españolas del capital de Iberia

Intensidad o importe de la ayuda: Medida no constitutiva de ayuda

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 1.9.1999

Estado miembro: Italia (Sicilia)

Ayuda: N 399/99

Denominación: Régimen de ayuda social para subvencionar el transporte aéreo a partir de las islas menores de Sicilia y con destino a las mismas

Objetivo: Régimen de apoyo para los residentes y trabajadores que desarrollan una actividad en las islas menores de Sicilia a fin de reducir en un 50 % el precio de los billetes de avión a partir de las islas menores y con destino a las mismas

Fundamento jurídico: Articolo 14 della Legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e Decreto regionale 280/5 del 16 novembre 1998

Intensidad o importe de la ayuda: El 50 % del precio del billete

Duración: Ilimitada

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 29.9.1999

Estado miembro: España (País Vasco)

Ayuda: N 697/98

Denominación: Mercedes Benz España, SA — Proyecto NCV 2

Objetivo: Ayuda regional (sector automóvil)

Fundamento jurídico: Ayuda *ad hoc*

Intensidad o importe de la ayuda: 6,7 % de equivalente en subvención bruta (ESB)

Duración: Cuatro años

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 13.10.1999

Estado miembro: Austria (Waldviertel)

Ayuda: N 253/99

Denominación: Ayuda ambiental a MKE Heidenreichstein

Objetivo: Operaciones de limpieza de daños recientes

Fundamento jurídico: Förderungsrichtlinien 1997 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Presupuesto: 12,41 millones de chelines austríacos (901 943 euros)

Intensidad o importe de la ayuda: 30 %

Duración: 1999 a 2004

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 13.10.1999

Estado miembro: República Helénica

Ayuda: N 462/99

Denominación: Acuerdo de concesión para el proyecto, la construcción, la financiación y la explotación de la Autopista Elefsina-Stavros-Aeropuerto de Spata y la Autopista Periférica Occidental de Imittos

Objetivo: Proyecto, construcción, financiación y explotación de la Autopista Elefsina-Stavros-Aeropuerto de Spata y la Autopista Periférica Occidental de Imittos

Fundamento jurídico: Σύμβαση παραχώρησης

Presupuesto: Valor actual de 250 millones de euros el 30.6.1994 y garantías estatales

Intensidad o importe de la ayuda: Medida que no constituye una ayuda

Duración: Plazo total de la concesión (construcción y explotación) de 23 años

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes artículos 92 y 93) del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(1999/C 351/07)

Fecha de adopción de la decisión: 26.10.1999

Estado miembro: Italia (Las Marcas)

Ayuda: N 575/98

Denominación: Leader II: Decisión regional nº 87 de 17.9.1996

Objetivo:

Favorecer el desarrollo económico del sector agrario a través de las siguientes medidas de ayuda:

- ayudas para actividades de diversificación, tales como turismo rural, artesanía, creación de museos y centros didácticos, transformación y venta en las explotaciones
- ayudas a la inversión en el sector de la transformación y de la comercialización
- ayudas a la inversión destinada a la reestructuración de empresas tradicionales vetustas e improductivas
- ayudas a la investigación, el desarrollo y la experimentación
- ayudas para asistencia técnica, consultorías y divulgación de información
- ayudas para la constitución de asociaciones de productores o la ampliación de sus tareas
- ayudas para la realización de controles de calidad obligatorios o facultativos
- ayudas para la promoción general y la publicidad
- ayudas para la realización de estudios e investigaciones de mercado
- ayudas para la participación en ferias
- ayudas para la realización de pruebas de rendimiento y de descendencia

Fundamento jurídico: Delibera amministrativa n. 87 del 17.9.1996, CEE. Iniziativa Leader II: collegamento tra le azioni di sviluppo rurale. Programma Leader regionale. Approvazione del programma modificato a seguito delle richieste della Commissione CE

Presupuesto: aproximadamente 7 250 000 euros

- i) primer formulario tipo: «Diversificación de la producción agrícola y de las actividades de los agricultores» (500 000 ecus)
- ii) segundo formulario tipo: «estructuras» (3 000 000 ecus)
- iii) tercer formulario tipo: «experimentación» (500 000 ecus)
- iv) cuarto formulario tipo: «Valorización y protección del paisaje rural» (100 000 ecus)
- v) quinto formulario tipo: «Certificación de calidad» (250 000 ecus)
- vi) sexto formulario tipo: «Mejora del medio ambiente y de las condiciones de vida» (140 000 ecus)
- vii) séptimo formulario tipo: «Promoción» (800 000 ecus)
- viii) octavo formulario tipo: «Franquicias rurales» (200 000 ecus)

ix) noveno formulario tipo: «Asistencia técnica» (500 000 ecus)

x) décimo formulario tipo: «Promoción» (600 000 ecus)

xi) undécimo formulario tipo: «experimentación y divulgación» (600 000 ecus)

xii) duodécimo formulario tipo: «Demostración y divulgación» (60 000 ecus)

Intensidad o importe de la ayuda: Variable en función de las distintas medidas

Duración: Ayuda única (programa Leader II)

Otros datos: Las medidas de ayuda previstas en el acto notificado se llevarán a efecto con arreglo a los compromisos contraídos y dentro de los límites fijados en las cartas de las autoridades competentes de fechas 20.4.1999, 13.8.1999 y 10.9.1999, con registro de entrada, respectivamente, el 26.4.1999, el 16.8.1999 y el 20.9.1999.

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 29.10.1999

Estado miembro: Alemania (Renania del Norte-Westfalia)

Ayuda: N 643/98

Denominación: Modificación de una medida destinada a fomentar métodos agrícolas favorables al medio ambiente y al hábitat natural

Objetivo: Fomento del cultivo extensivo de pastizales y, especialmente, conversión de tierras de cultivo en pastos

Fundamento jurídico: Förderprogramm für eine umweltverträgliche und standortangepasste Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen sowie Runderlaß an Bezirksregierungen betreffend Rahmenrichtlinien für Kulturlandschaftsprogramme der Kreise und kreisfreien Städte (Entwurf)

Presupuesto:

- 1998: 14,4 millones de marcos alemanes
- 1999: 20,4 millones de marcos alemanes
- 2000: 27,2 millones de marcos alemanes
- 2001: 33,2 millones de marcos alemanes

Intensidad o importe de la ayuda: Variable

Duración: Indeterminada

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 29.10.1999

Estado miembro: Grecia

Ayuda: N 318/99

Denominación: Modificación del régimen de ayuda por el que se otorgan ayudas a los agricultores cuyas explotaciones resultaron dañadas en las tormentas e inundaciones de 1997-1998.

Objetivo: Compensar las pérdidas sufridas en la producción de espárragos y alfalfa a causa de las condiciones meteorológicas adversas

Fundamento jurídico: Κοινή υπουργική απόφαση

Presupuesto: Presupuesto total de 2 500 millones de dracmas griegas (aproximadamente 8 millones de euros) que la modificación no ha variado

Intensidad o importe de la ayuda: 60 % de las pérdidas

Duración: 1998-2000

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 26.10.1999

Estado miembro: Italia (Abruzzo)

Ayuda: N 377/99

Denominación: Programa regional para el cultivo de patatas

Objetivo: Mejora de la calidad de las patatas, consolidación de los mercados, creación de un consorcio, estabilización de ingresos

Fundamento jurídico: Articolo 13 della legge regionale n. 53/97

Presupuesto: 2 982 millones de liras italianas (aproximadamente 1,540 millones de euros)

Intensidad o importe de la ayuda: Variable según las medidas de la ayuda

Duración: Tres años (1999-2001)

Otros datos: Recomendación de adaptación de determinadas medidas de la ayuda y retirada de una ayuda

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

No oposición a una concentración notificada

(asunto COMP/M.1707 — Gilde Buy-Out Fund/Synbra)

(1999/C 351/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 20 de octubre de 1999, la Comisión decidió no oponerse a la concentración de referencia y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo. El texto completo de la decisión está disponible únicamente en inglés y se hará público después de liberado de cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

- en versión papel en las oficinas de ventas de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (véase la lista en la última página),
- en formato electrónico, en la versión «CEN» de la base de datos CELEX, con el número de documento 399M1707. CELEX es el sistema de documentación automatizado de la legislación de la Comunidad Europea. Podrá obtenerse más información sobre la suscripción en la dirección siguiente:

EUR-OP
Información, Mercadotecnia y Relaciones Públicas (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763.

Notificación previa de una operación de concentración**(asunto COMP/M.1772 — Continental Teves/Automotive Distance Control)**

(1999/C 351/09)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El 26 de noviembre de 1999 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo ⁽¹⁾, modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/97 ⁽²⁾, la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas Continental Teves AG & Co. oHG (ContiTeves) y TEMIC Telefunken Microelectronic GmbH (TEMIC), ambas con sede en Alemania, y la empresa Leica Geosystems AG (LeicaGeo), con sede en Suiza, adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa alemana Automotive Distance Control Systeme GmbH (ACC), a través de adquisición de activos.

2. Ámbito de actividad de las empresas implicadas:

- ContiTeves: desarrollo, fabricación y distribución de equipamientos de frenos, sistemas de control de frenos y líquidos de frenos para vehículos de motor,
- TEMIC: sistemas electrónicos para vehículos de motor,
- LeicaGeo: desarrollo, fabricación y distribución de aparatos ópticos, mecánicos, electrónicos y óptico-eléctricos, instrumentos y sistemas,
- ADC: desarrollo, fabricación, distribución y servicio en sistemas de control remoto para las industrias de fabricación de automóviles.

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 ó 296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.1772 — Continental Teves/Automotive Distance Control, a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección B — Grupo Operativo de Operaciones de Concentración
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

⁽²⁾ DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

DIPLOMAS, CERTIFICADOS Y OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS DE ARQUITECTURA QUE SON OBJETO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS

(1999/C 351/10)

[Actualización de la Comunicación 98/C 217/03 de 11 de julio de 1998 ⁽¹⁾]

A continuación se reproduce la lista de diplomas, certificados y otros títulos académicos de arquitectura, conforme quedó establecida con arreglo al artículo 7 de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios ⁽²⁾.

Los diplomas publicados a continuación son los que los Estados miembros de la CE tendrán que reconocer a los estudiantes que iniciaron sus estudios de arquitectura a partir del año académico 1988/1989. Por lo que se refiere a aquellos estudiantes que hayan iniciado sus estudios de arquitectura antes del año académico 1988/1989, se reconocerán los diplomas mencionados:

- por lo que se refiere a los Estados miembros distintos de España y Portugal, en el artículo 11 de la Directiva 85/384/CEE de 10 de junio de 1985 ⁽³⁾;
- por lo que se refiere a España y Portugal, en el artículo 1 de la Directiva 85/614/CEE de 20 de diciembre de 1985 ⁽⁴⁾;
- asimismo, por lo que se refiere exclusivamente a Portugal, en el artículo 1 de la Directiva 86/17/CEE de 27 de enero de 1986 ⁽⁵⁾ rectificada mediante publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* L 87 de 2 de abril de 1986.

Por otra parte, la Directiva 85/384/CEE prevé también el reconocimiento de otros títulos de arquitectura. Éstos son los mencionados en los artículos 5, 12 y 14 de dicha Directiva.

Conforme al apartado 2 del artículo 7 de dicha Directiva, la Comisión publicará periódicamente actualizaciones de la presente lista.

⁽¹⁾ DO C 217 de 11.7.1998.

⁽²⁾ DO L 223 de 21.8.1985.

⁽³⁾ Para Austria, Finlandia y Suecia, los diplomas mencionados en el artículo 11 de la Directiva 85/384/CEE, modificado por el Acta de Adhesión, pudiendo haberse comenzado los estudios después del año académico 1988/1989, pero antes del año académico 1998/1999.

⁽⁴⁾ DO L 376 de 31.12.1985.

⁽⁵⁾ DO L 27 de 1.2.1986.

Estado miembro	Denominación del Título	Institución que expide el título	Certificado que acompaña al título
BELGIQUE/BELGIË	Architecte — Architect	Écoles nationales supérieures d'architecture	
	Architecte — Architect	Instituts supérieurs d'architecture	
	Architect	École provinciale supérieure d'architecture de Hasselt	
	Architecte — Architect	Académies royales des Beaux-Arts	
	Architecte — Architect	Écoles Saint-Luc	
	Ingénieur civil — architecte	Facultés des sciences appliquées des universités	
		Faculté polytechnique de Mons	
	Architect — architecte	Nationale hogescholen voor architectuur	
	Architect — architecte	Hogere-architectuur-instituten	
	Architect	Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt	
	Architect — Architecte	Koninklijke Academies voor Schone Kunsten	
	Architect — Architecte	Sint-Lucasscholen	
	Burgerlijke ingenieur — architect	Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten	
		„Faculté Polytechnique” van Mons	
DANMARK	Arkitekt cand.arch.	Kunstakademiets Arkitektskole i København	
		Arkitektskolen i Århus	
DEUTSCHLAND	Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Universität	Universitäten (Architektur/Hochbau)	
		Technischen Hochschulen (Architektur/Hochbau)	
		Technischen Universitäten (Architektur/Hochbau)	
		Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)	
		Hochschulen für bildende Künste	
		Hochschulen für Künste	
	Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH	Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) ⁽¹⁾	
		Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen	
ΕΛΛΑΔΑ	Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού	— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής	Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

Estado miembro	Denominación del Título	Institución que expide el título	Certificado que acompaña al título
ESPAÑA	Título oficial de arquitecto	Rectores de las universidades enumeradas a continuación: Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de València Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona	
FRANCE	Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale Diplôme d'architecte ESA Diplôme d'architecte ENSAIS	Le ministre chargé de l'architecture École spéciale d'architecture de Paris École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture	
IRELAND	Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.NUI) Degree standard diploma in architecture (Dip.Arch) Certificate of associateship (ARIAI) Certificate of membership (MRIAI)	National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin College of Technology, Bolton Street, Dublin Royal Institute of Architects of Ireland Royal Institute of Architects of Ireland	
ITALIA	Laurea in architettura	Università di Camerino Università di Catania — Sede di Siracusa Università di Chieti Università di Ferrara Università di Firenze Università di Genova Università di Napoli Federico II Università di Napoli II Università di Palermo Università di Parma Università di Reggio Calabria Università di Roma «La Sapienza» Università di Roma III	Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

Estado miembro	Denominación del Título	Institución que expide el título	Certificado que acompaña al título
ITALIA (cont.)	Laurea in ingegneria edile/architettura Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 1998/1999	Università di Trieste Politecnico di Bari Politecnico di Milano Politecnico di Torino Istituto universitario di architettura di Venezia Università dell'Aquila Università di Pavia Università di Roma «La Sapienza»	
NEDERLAND	1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur 2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek 3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen — de Hogeschool Maastricht te Maastricht	1. Technische Universiteit te Delft 2. Technische Universiteit te Eindhoven	Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 85/384/EEG
ÖSTERREICH	Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.	Technische Universität, Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) Technische Universität Wien Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) Hochschule für Angewandte Kunst in Wien Akademie der Bildenden Künste in Wien Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz	

Estado miembro	Denominación del Título	Institución que expide el título	Certificado que acompaña al título
PORTUGAL	Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura	Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto Escola Superior Artística do Porto	
UNITED KINGDOM	Diplomas in architecture	Universities of Brighton Cambridge Central England in Birmingham De Montfort East London Edinburgh Glasgow Greenwich Heriot-Watt Huddersfield Humberside Kingston Leeds Metropolitan John Moores, Liverpool London Manchester Metropolitan North London Oxford Brookes Plymouth Portsmouth Robert Gordon, Aberdeen Sheffield The South Bank Westminster The Canterbury College of Art The Glasgow school of Art	Preceded in each case by either a first degree in architecture awarded (after training lasting at least three years full-time or four years part-time ⁽²⁾ by one of the named universities or colleges) or by the Intermediate Examination of the Architectural Association or the Examination Part 1 of the Royal Institute of British Architects These diplomas, degrees and examinations are to be accompanied in each case by a certificate issued by the Architect's Registration Board confirming that the qualifications comply with Directive 85/384/EEC and are recognised by the Board for admission to the Statutory Register of Architects
	* Degrees in architecture	* Universities of Bath Belfast Liverpool Manchester Newcastle Nottingham Wales Dundee Strathclyde Glasgow	
	Final examination	Architectural Association	
	Examination in architecture	Royal College of Art	
	Examination Part 2	Royal Institute of British Architects	

⁽¹⁾ Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder 2 der Richtlinie 85/384/EWG anzuerkennen.

⁽²⁾ Where the first degree is awarded after training lasting four years part-time, the subsequent training leading to an architectural qualification must last at least three years, part-time or full-time.

Información arancelaria vinculante

(1999/C 351/11)

Lista de las autoridades aduaneras habilitadas por los Estados miembros para recibir la solicitud de información arancelaria vinculante o para impartir estos últimos en aplicación del apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CEE) No 2454/93 ⁽¹⁾, modificado por el Reglamento (CE) No 12/97 ⁽²⁾.

Estados miembros	Autoridad aduanera	Estados miembros	Autoridad aduanera
AUSTRIA	Bundesministerium für Finanzen Abteilung III/7 Himmelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien	BÉLGICA (cont.)	Monsieur le directeur général des douanes et accises Service du tarif Tour des Finances — Boîte postale 37 B-1010 Bruxelles
BÉLGICA	<i>Autoridades aduaneras habilitadas para impartir la información arancelaria vinculante</i> De Directeur-generaal der douane en accijnzen Dienst Tarief Financietoren — bus 37 B-1010 Brussel Monsieur le directeur général des douanes et accises Service du tarif Tour des Finances — Boîte postale 37 B-1010 Bruxelles <i>Autoridades aduaneras habilitadas para recibir la solicitud de información arancelaria vinculante</i> De Directeur der douane en accijnzen Kattendijkdok — Oostkaai 22 B-2000 Antwerpen De Directeur der douane en accijnzen Picardstraat 1-3 B-1210 Brussel Monsieur le directeur des douanes et accises Rue Picard 1-3 B-1210 Bruxelles De Directeur der douane en accijnzen Ter Plaeten Sint-Lievenslaan 27 B-9000 Gent De Directeur der douane en accijnzen Voorstraat 41-43-45 B-3500 Hasselt Monsieur le directeur des douanes et accises Rue de Frangnée 40 B-4000 Liège Monsieur le directeur des douanes et accises Chemin de l'Inquiétude B-7000 Mons De Directeur-generaal der douane en accijnzen Dienst Tarief Financietoren — bus 37 B-1010 Brussel	DINAMARCA	Toldcenter Nordsjælland Sundtoldvej 8A DK-3000 Helsingør Toldcenter Vestjylland Brændgårdvej 10 DK-7400 Herning Toldcenter København Snorresgade 15 DK-2300 København S Toldcenter Sydvestsjoelland Gymnasievej 21 DK-4600 Køge Toldcenter Fyn Lerchesgade 35 DK-5000 Odense C Toldcenter Sydjylland Nordås 17 DK-7100 Vejle Toldcenter Nordjylland Dag Hammarskjoldsgade 4 DK-9000 Aalborg Toldcenter Østjylland Maragrethepladsen 4 DK-8000 Århus C
		FINLANDIA	<i>Autoridades aduaneras habilitadas para impartir la información arancelaria vinculante</i> Tullihallitus – Tariffiyksikkö Erottajankatu 2, PL 512 FIN-00101 Helsinki Tullstyrelsen Tariffenhet Skillnadsgatan 2, PL 512 FIN-00101 Helsingfors <i>Autoridades aduaneras habilitadas para recibir la solicitud de información arancelaria vinculante</i> Administración Central y todas las administraciones aduaneras
		FRANCIA	Todas las administraciones aduaneras

⁽¹⁾ DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.

⁽²⁾ DO L 9 de 13.1.1997, p. 1.

Estados miembros	Autoridad aduanera	Estados miembros	Autoridad aduanera
ALEMANIA	Oberfinanzdirektion Cottbus Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Berlin Grellstraße 16—31 D-10409 Berlin para las mercancías de las partidas 1101 a 1104 y 2302 y para los capítulos 86 a 92 y 94 a 97 de la nomenclatura combinada Oberfinanzdirektion Koblenz Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Frankfurt am Main Gutleutstraße 185 D-60327 Frankfurt am Main para las mercancías de los capítulos 25, 31, 32, 34 a 37 (a la excepción de las partidas 3505 y 3506), 41 a 43 y 50 a 70 de la nomenclatura combinada Oberfinanzdirektion Hamburg Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Baumacker 3 D-22523 Hamburg para las mercancías de los capítulos 2, 3, 5, 9 a 16 (a la excepción de las partidas 1101 a 1104), 18, 23 (excepto partida 2302), 24 y 27, partidas 3505 y 3506 y capítulos 38 a 40, 45 y 46 de la nomenclatura combinada Oberfinanzdirektion Köln Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Merianstraße 110 D-50765 Köln para las mercancías de los capítulos 17, 26, 28, 30, 33, 47 a 49, 71 a 83 y 93 de la nomenclatura combinada Oberfinanzdirektion Nürnberg Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München Landsberger Straße 122 D-80339 München para las mercancías de los capítulos 1, 4, 6 a 8, 19 a 22, 44, 84 y 85 de la nomenclatura combinada	GRECIA	Υπουργείο Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Διεύθυνση δασμολογική (17) Τμήμα Α (δασμολογικό) Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αμαλίας 40 GR-105 58 Αθήνα
		IRLANDA	Office of the Revenue Commissioners Customs and Excise Branch Tariff Classification Unit, Nenagh IRL-Tipperary
		ITALIA	Todas las administraciones aduaneras
		LUXEMBURGO	Direction des douanes Boîte postale 26 L-2010 Luxembourg
		PAÍSES BAJOS	Douanedistrict Rotterdam T.a.v. Team 2 Postbus 50966 NL-3007 BG Rotterdam
		PORTUGAL	Todas las administraciones aduaneras
		ESPAÑA	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Guzmán el Bueno 137 E-28071 Madrid
		SUECIA	Generaltullstyrelsen Box 2267 S-103 17 Stockholm
		REINO UNIDO	HM Customs and Excise Tariff and Statistical Office Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-Sea UK-Essex SS99 1AA

III

(Informaciones)

COMISIÓN

Aplicación de la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000)

Intercambio, desarrollo y transferencia de información y de experiencias sobre buenas prácticas

Convocatoria de propuestas

VP/1999/021

(1999/C 351/12)

I. Contexto político

El Consejo adoptó el 22 de diciembre de 1995 una Decisión ⁽¹⁾ relativa a un programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El programa tiene los siguientes objetivos:

- a) promover la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y acciones (*mainstreaming*);
- b) movilizar a los agentes de la vida económica y social para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;
- c) promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en una economía en mutación, sobre todo en los ámbitos de la educación, de la formación profesional y del mercado del trabajo;
- d) conciliar la vida profesional y familiar de los hombres y de las mujeres;
- e) promover la participación equilibrada de los hombres y de las mujeres en la toma de decisiones
- f) fortalecer las condiciones de ejercicio de los derechos a la igualdad.

II. Objetivo de la convocatoria de propuestas

De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 4 de la Decisión del Consejo, la Comisión aportará, «con el fin de permitir el intercambio de informaciones y de experiencias sobre buenas prácticas, un apoyo metodológico, técnico o financiero a proyectos que permitan la identificación y el desarrollo de buenas prácticas, así como la transferencia de información y de experiencias sobre las mismas». El objeto de la presente convocatoria de propuestas es seleccionar los proyectos que serán apoyados por el programa en el marco del presupuesto de 2000.

III. Criterios de admisibilidad

— De conformidad con el artículo 5 de la Decisión del Consejo, en la presente convocatoria de propuestas no se selec-

cionarán las acciones que puedan recibir una ayuda en el marco de otros programas o políticas comunitarios ⁽²⁾.

- El valor añadido del programa radica en la identificación y el intercambio transnacional de informaciones y buenas prácticas en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para que se considere que son transnacionales, los proyectos deberán incluir organizaciones de un mínimo de tres diferentes Estados miembros y/o Estados del Espacio Económico Europeo (EEE) ⁽³⁾, que trabajen en asociación. El programa de acción prevé la participación de países candidatos a convertirse en miembros de la Unión Europea. En la actualidad, los siguientes países cumplen todos los requisitos para participar en el programa: República Checa, Hungría, Lituania, Rumania y Eslovenia. Para obtener información más detallada sobre las condiciones de su participación, véase la nota informativa que se enviará junto con el formulario de candidatura.

Los proyectos deberán asimismo tener como objetivo el intercambio de información o de experiencias, la transferencia de buenas prácticas de una organización a otra, o la colaboración en el diseño y la ejecución de acciones. Por lo tanto, el programa no está encaminado a apoyar cualquier medida que pueda aplicarse a escala nacional o local en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

- Las propuestas deben aportar la prueba de una cofinanciación mínima del 40 % del coste total del proyecto.
- **La presente convocatoria de propuestas no tiene por objeto los proyectos seleccionados en el marco del ejercicio presupuestario del programa para 1999 y que se planearon desde el principio como plurianuales (es decir, cuya acción continúa después de junio de 2000). Se realizará un proceso de selección independiente para las solicitudes de renovación de estos proyectos.**

⁽¹⁾ Decisión 95/593/CE (DO L 335 de 30.12.1995, p. 37).

⁽²⁾ Otros programas o políticas comunitarios son, por ejemplo, el FSE, NOW, Leonardo, Leader II y Daphne.

⁽³⁾ Los países miembros del EEE son, además de los Estados miembros de la Comunidad, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

- Las propuestas exclusivamente encaminadas a la realización de estudios de investigación serán objeto de un proceso de selección independiente.

IV. Ámbitos de actuación

Las propuestas de proyectos deberán contribuir a uno o varios de los objetivos mencionados en el punto I y deberán tener por objeto una de las áreas siguientes:

1. Integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y actividades (mainstreaming)

Promoción y desarrollo de métodos, estrategias y modelos destinados a integrar la dimensión de la igualdad de oportunidades en todas las políticas y actividades.

2. Empleo y vida laboral

- Educación, formación y formación continua, así como promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el empleo.
- Acceso al empleo y a las condiciones de empleo.
- Promoción de la independencia económica.
- Desegregación vertical y horizontal del mercado de trabajo.
- Igualdad de retribución para un mismo trabajo y para un trabajo de igual valor.
- Organización y flexibilidad de la vida laboral.
- Aspectos vinculados al entorno de trabajo, incluido el acoso sexual.
- Espíritu de empresa.
- Conciliación de las responsabilidades profesionales y parentales, incluido el papel de los hombres.

3. Equilibrio entre los sexos en la toma de decisiones

Desarrollo y supervisión de métodos, estrategias y acciones para promover una participación equilibrada de los hombres y las mujeres en la toma de decisiones, incluidos los puestos con mayor responsabilidad.

4. Información

Promoción de la información y de otras acciones para incrementar el conocimiento y fomentar las actitudes favorables a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

V. Agentes

Los proyectos deberán ser presentados y puestos en práctica por agentes y organizaciones públicos y privados que dispongan de las cualificaciones o de la experiencia adecuadas. El agente o la organización que ponga en práctica el proyecto deberá estar constituido y registrado con arreglo a la legislación vigente, y deberá dar prueba de que posee una personalidad jurídica adecuada, así como de su viabilidad económica y su integridad profesional para completar el proyecto. La Comisión

Europea verificará la capacidad del candidato para realizar y financiar adecuadamente las actividades para las que se concede una subvención.

El agente o la organización que ponga en práctica el proyecto deberá tener su sede en uno de los Estados miembros de la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo (EEE) ⁽⁴⁾.

Se fomenta en especial la participación de los siguientes agentes:

- interlocutores sociales, en especial las propuestas conjuntas de organizaciones de empresarios y de trabajadores;
- organizaciones no gubernamentales, y en particular organizaciones de mujeres;
- organismos locales y regionales.

Los proyectos deberán ser apoyados por distintos socios a escala transnacional: el promotor del proyecto deberá cooperar con diversos socios de los demás Estados miembros de la UE o del EEE ⁽⁵⁾.

Con el fin de lograr la máxima repercusión, y de acuerdo con el objetivo del programa de promover la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en todas las políticas, el proyecto deberá implicar preferentemente, además de las organizaciones transnacionales asociadas, a uno o más agentes a escala nacional, regional o local con capacidad para desarrollar el tema elegido.

En la página Web de la Unidad de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres y asuntos relativos a la familia y a los niños puede consultarse una base de datos que contiene los nombres y direcciones de organizaciones europeas que se han mostrado interesadas en convertirse en socios de proyectos relativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Dirección de Internet:

http://europa.eu.int/comm/dg05/equ_opp/index_en.htm

VI. Criterios de selección

Para poder recibir una subvención comunitaria, los proyectos deberá cumplir las condiciones siguientes:

- ofrecer un valor añadido a escala de la Unión Europea,
- promover uno o más de los objetivos enumerados en el punto I,
- contribuir a la promoción de buenas prácticas en los ámbitos enumerados en el punto IV,
- permitir intercambios transnacionales,
- tener por objeto resultados transferibles,
- incluir una estrategia de difusión de los resultados obtenidos,
- ser presentados y aplicados por los agentes y organizaciones mencionados en el punto V,

⁽⁴⁾ Por lo que respecta a la participación de organizaciones de países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, remítase al punto III y lea la nota informativa que se envía junto con el formulario de candidatura.

⁽⁵⁾ Véanse las notas 3 y 4.

- poseer objetivos claros y concretos, así como una duración realista con respecto a ellos,
- ser objeto de una evaluación objetiva y regular,
- ser tan innovadores como sea posible en cuanto a contenido y organización.

VII. Duración de los proyectos

La presente convocatoria de proyectos se refiere a un período contractual que se extiende desde el 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2001. La duración de cada acción deberá definirse en función de sus objetivos. Habida cuenta de que el 2000 es el último año del programa, los contratos se establecerán solamente por un año.

VIII. Financiación

Las propuestas subvencionables se seleccionarán teniendo en cuenta el presupuesto concedido anualmente al programa por la autoridad presupuestaria comunitaria. La contribución financiera de la Comunidad no superará un porcentaje máximo del 60 % de los costes totales aceptables del proyecto. Solamente son aceptables los costes de las acciones directamente vinculadas a la consecución del objeto del acuerdo. Los costes deberán ser necesarios para la realización del proyecto.

Los promotores de los proyectos deberán garantizar una cofinanciación para el 40 % restante de los costes del proyecto. La Comisión recomienda que la cofinanciación sea en efectivo. En cualquier caso, deberá cofinanciarse con contribuciones en efectivo un mínimo del 15 % de los costes aceptables del proyecto. Podrán aceptarse contribuciones en especie hasta un máximo del 25 % del total de costes aceptables del proyecto. No se admitirá a los promotores de proyectos que no presenten pruebas de que han obtenido una cofinanciación. La Comisión se reserva el derecho de reducir la contribución comunitaria si los costes del presupuesto provisional no son subvencionables, o si son subvencionables pero son demasiado elevados. Para información detallada sobre la admisibilidad de los costes, la presentación del presupuesto provisional y el cálculo de la subvención comunitaria, consúltense las directrices para los candidatos.

Como orientación para los promotores de los proyectos y en función de la dotación presupuestaria del programa, las subvenciones comunitarias serán en general de un máximo de 150 000 euros por proyecto y por año. Con el fin de concentrar estratégicamente los recursos y de respetar el requisito de la transnacionalidad y del intercambio transnacional, el programa no apoya en principio proyectos a pequeña escala. Por consiguiente, las subvenciones no podrán ser inferiores a 30 000 euros. Por regla general, la subvención comunitaria se pagará en plazos sucesivos.

IX. Procedimientos de presentación y de selección

Los organismos y las instituciones interesados en presentar una propuesta deberán dirigirse a la Comisión por escrito (carta o fax, véase la dirección a continuación) para obtener el formulario de candidatura y las directrices para los candidatos. **Solamente se aceptarán los formularios correctamente cumplimentados y firmados, que cumplan los requisitos establecidos en las directrices.**

mentados y firmados, que cumplan los requisitos establecidos en las directrices.

En particular, toda propuesta deberá incluir la información siguiente:

- título de la propuesta,
- objetivo del programa al que corresponde la propuesta (véase el punto I, más arriba),
- ámbito(s) de acción al (a los) que corresponde la propuesta (véase el punto IV, más arriba),
- nombre de la organización responsable desde el punto de vista jurídico y financiero,
- nombres de los socios:
 - a nivel transnacional,
 - a nivel nacional, local o regional, según el caso,
- descripción del proyecto (incluido el programa de trabajo del proyecto),
- medios de evaluación del proyecto,
- medios de difusión de los resultados del proyecto,
- duración del proyecto,
- coste total del proyecto (en euros),
- contribución comunitaria solicitada a la Comisión (en euros),
- presupuesto detallado para el período comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001, con una lista de los gastos y de los ingresos (incluidas las fuentes de cofinanciación de la acción correspondientes, como mínimo, al 40 % de los costes totales).

La selección de los proyectos se basará en los criterios de admisibilidad y selección anteriormente descritos, en la calidad y la viabilidad de la acción propuesta y en la conformidad con la asignación presupuestaria del programa.

La propuesta deberá enviarse por correo o entregarse a más tardar el día 15 de febrero de 2000, de lo que dará fe el matasellos de correos, a:

Comisión Europea
Unidad EMPL/D/5 «Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres y asuntos relativos a la familia y los niños»
Rue de la Loi/ Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

y, simultáneamente, a las autoridades nacionales competentes (véase la lista adjunta).

Toda candidatura remitida por fax será automáticamente rechazada.

Para toda información adicional, pueden dirigirse por escrito a la unidad EMPL/D/5 en la dirección indicada o, por fax al número siguiente: (+32-2) 296 35 62.

ANEXO

Lista de miembros del Comité creado para la aplicación del programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000)**ÖSTERREICH**

Ms Bernadette GISINGER-SCHINDLER
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Abteilung Europäische Integration
Stubenring 1
A-1010 Wien

BELGIË

Ms Marie-Paule PATERNOTTRE
Kabinet van Tewerkstelling & Arbeid
Gelijke Kansenbeleid
Belliardstraat 51
B-1040 Brussel

DANMARK

Ms Mette SENECA NIELSEN
Head of Secretariat
Danish Equal Status Council
Tordenskjolsgade 27
Postboks 1519
DK-1020 København K

DEUTSCHLAND

Mrs Ulrike FREMEREY
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Referat Internationale Frauenpolitik
Rochusstraße 8—10
D-53123 Bonn

ELLAS

Ms Efithia BEKOU-BALTA
General Secretariat for Equality
8 Dragatsaniou Str.
GR-10559 Athens

ESPAÑA

Ms Concepción DANCAUSA TREVIÑO
Directora General
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Instituto de la Mujer
c/ Condesa de Venadito 34
E-28027 Madrid

SUOMI

Ms Leila RÄSÄNEN
Ministry of Social Affairs and Health
PO Box 267
FIN-00171 Helsinki

FRANCE

Mrs Brigitte ZAGO-KOCH
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
Chargée de mission
31, rue le Peletier
F-75009 Paris

IRELAND

Ms Noreen WALSH
Department of Equality and Law Reform
Dún Aímhíngín
43/49 Mespil Road
IRL-Dublin 4

ITALIA

Ms Giovanna ROCCA
Dirigente Div. VII Igiene e Sicurezza del Lavoro
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
Via Flavia 6
I-00186 Roma

LUXEMBOURG

Ms Maddy MULHEIMS
Ministère de la Promotion Féminine
33, boulevard Prince Henri
L-2921 Luxembourg

NEDERLAND

Ms dr. F. J. van HOUWELINGEN
Coördinator Internationale Aangelegenheden
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Coördinatie Emancipatiebeleid
Postbus 90801
NL-2509 Den Haag

PORTUGAL

Dra. Ana Maria BRAGA DA CRUZ
Presidente da Comissão para a Igualdade e para os
Direitos das Mulheres
Av. da República 32-1º
P-1093 Lisboa Codex

SVERIGE

Ms Mona DANIELSON
Ministry of Labour
Drottninggatan 21
S-103 33 Stockholm

UNITED KINGDOM

Ms Esther ABSALOM
Dept. for Education & Employment
4F — Caxton House
6-10 Tothill Street
UK-London SW1H 9NF

ICELAND

Ms Helga Gudrun JONASDOTTIR
Office of the Equal Status Council
Posthusstraeti 13
101 Reykjavik
Iceland

NORWAY

Ms Anne HAVNOR
Ministry of Children and Family Affairs
PO Box 8036 Dep.
0030 Oslo
Norway

LIECHTENSTEIN

Ms Bernadette KUBIK-RISCH
Regierungsgebäude
9490 Vaduz
Liechtenstein